

48.<sup>a</sup> SESION ORDINARIA — SEPTIEMBRE 20 DE 1888

Presidencia del doctor PELLEGRINI

**Ministro presente:** de justicia, culto e instrucción pública.

**Senadores presentes:** Baibien, Baltoré, Barros, Cambaceres, Dávila, de la Silva, del Valle, Derqui, Febre, Funes, Gil, Mendoza, Navarro, Oliva, Ortega, Paz, Pérez, Rodríguez (C. J.), Ruiz (H.), Ruiz (M.) y Zapata.

**Senadores ausentes, con licencia:** Gollán, Ortiz, Rocha, Rodríguez (M. F.) y Tello.

**Senadores ausentes, con aviso:** Moyano, Nougues y Pizarro.

SUMARIO

- 1.—Asuntos entrados.
- 2.—El Senado, constituido en Comisión, discute en particular el proyecto de ley sobre matrimonio civil.

—En Buenos Aires, a veinte de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente y los señores senadores arriba inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores senadores Moyano, Nougues y Pizarro, con aviso; y con licencia, Gollán, Ortiz, Rocha, Rodríguez (M. F.) y Tello.

Leída y aprobada el acta de la anterior de 19 del corriente (47.<sup>a</sup> ordinaria), se da cuenta de los siguientes asuntos entrados:

1

Comunicaciones oficiales

El general Juan Ayala solicita en compra al precio de ley, 15 leguas de tierras fiscales. A la Comisión del Interior.

Peticiones particulares

El obispo de San Juan de Cuyo con el clero regular y secular solicita no se sancione el proyecto de ley sobre matrimonio. Reservado en Secretaría.

Despachos de Comisión

La Comisión de Hacienda se ha expedido en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley autorizando a la Municipalidad de la Capital, a emitir hasta 10.000.000 pesos en títulos de deuda pública municipal; y en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, subvencionando con 200.000 pesos la II Exposición Internacional de Ganadería y Agricultura.

La de Guerra en el proyecto de ley, en revisión, concediendo pensión a la viuda del señor Linares.

**Sr. Presidente.** — Estos asuntos se imprimirán y formarán la orden del día correspondiente.

2

**Sr. Rodríguez (C. J.).** — Creo que ayer se presentaron las reformas al proyecto sobre matrimonio civil y de ello debe hacer referencia el acta.

**Sr. Presidente.** — Así se hará.

Según la resolución adoptada en la sesión anterior, corresponde constituir la Cámara en comisión para discutir en particular el proyecto a la orden del día.

Va a leerse el artículo 108 del reglamento.

—Se lee:

«Acordado que sea, la Comisión nombrará un presidente y un secretario, pudiendo serlo

los mismos que desempeñan estos cargos en el Senado.»

**Sr. Presidente.** — El Senado resolverá si procede al nombramiento de un presidente y un secretario.

**Sr. del Valle.** — Me parece que puede quedar constituida la Cámara en Comisión bajo la presidencia del señor vicepresidente de la República, y actuar como secretario el del Senado.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente.** — Queda constituido el Senado en Comisión.

**Sr. Derqui.** — Pido la palabra.

La sanción en general del proyecto sobre matrimonio civil, por el que, según el artículo 1º se modifica el título I, libro 1º, sección 2ª del Código Civil, que trata del matrimonio, sanción a que he concurrido con mi voto, importa la aceptación por parte del Senado, del pensamiento fundamental que ese proyecto entraña; importa decir que afronta la reforma de nuestra legislación en materia tan grave y delicada, como lo es sin duda, la que afecta la constitución de la familia.

Cual sea todo el alcance y trascendencia de la reforma, se desprende del largo y luminoso debate sostenido en la discusión en general del proyecto; debate en el que, si bien no ha sido clara y francamente planteada, deja por lo menos, entrever la cuestión fundamental que motiva la divergencia de opiniones, la profunda disidencia que existe entre los que en nombre de una religión, o en defensa de un culto, que nadie combate, y que el proyecto no se propone hostilizar, resisten la reforma, y los que la sostenemos, obedeciendo a principios que son la base sobre que reposa la existencia y organización regular de la sociedad.

Aceptado en general el pensamiento formulado por el Poder Ejecutivo, y sometido a la consideración del Congreso, hemos pensado que la reforma, una vez que se la inicia, debe responder al propósito que la inspira y que la justifica; algo más, que la exige y aun que la impone, como lo ha sostenido y demostrado el miembro informante de la mayoría de la Comisión de Legislación, el señor ministro de justicia, culto e instrucción pública y el del interior.

Consecuentes con esta opinión, como tuve ocasión de anunciarlo en la sesión anterior, hemos formulado, con mis honorables colegas los senadores por Buenos Aires y Mendoza docto-

res del Valle y Zapata, algunas modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo, obedeciendo a la convicción que tenemos, de que, una ley que como la que nos ocupa, tiene por objeto modificar nuestra legislación en punto tan trascendental, debe resolver sin vacilaciones todas las cuestiones que se han promovido en la discusión en general, y que si no tienden, sirven por lo menos al propósito de mantener una confusión de poderes, que clara y perfectamente deslindados en el terreno de los principios, deben serlo tratándose de su ejercicio, so pena de mantener y de prolongar una situación que reputamos inconciliable con el deber ineludible que nos está impuesto, de conservar y de ejercer en toda su plenitud, facultades que son inherentes a la soberanía y sin las cuales ésta ni siquiera se concibe.

Hemos debido entonces darnos, y nos hemos dado cuenta de las objeciones hechas a la ley de matrimonio civil, y si bien ellas han sido ya contestadas en la discusión en general, no podré excusarme del todo de entrar en algunas consideraciones en apoyo de la ley y de las modificaciones que vamos a proponer, una vez que haya dado una idea ligera de esas modificaciones, para que conociéndolas pueda el Honorable Senado darse cuenta exacta de su alcance a medida que vayamos sometiendo a su consideración en la discusión en particular del proyecto.

Voy, pues, a limitarme a dar una idea de esas modificaciones, sin entrar en extensos razonamientos, como podría hacerlo, porque el Senado se hallará ya fatigado después de una discusión tan prolongada, y porque sería anticipar un debate que no eludimos, que por el contrario venimos decididos a sostener, pero que tiene su oportunidad en la discusión en particular.

El proyecto del Poder Ejecutivo tiene, como he dicho, por objeto, modificar el título del Código Civil referente al matrimonio. En el capítulo I que trata del régimen del matrimonio, la modificación se limita a reducir los casos en que la validez del matrimonio no será juzgada en la República por la ley del lugar en que se haya celebrado.

En este capítulo se mantienen las disposiciones del Código Civil, y creemos que éstas no reclaman reformas.

El capítulo II, «De los esponsales» es el mismo del Código Civil que no los reconoce, y que creemos, como el señor ministro, que debe mantenerse.

En el capítulo III, en el que se establecen

los impedimentos, proponemos algunas modificaciones; unas que pueden ser consideradas como simplemente explicativas, otras tendientes a precisar el impedimento, para alejar en lo posible dudas o controversias en punto tan importante.

La modificación del artículo 9º, que es el primero de este capítulo, consiste en suprimir la calificación de los impedimentos que se establecen, calificación que no tiene objeto desde que en el capítulo sobre nulidad se expresan cuáles son los impedimentos que la causan.

La modificación en el inciso 4º consiste en restablecer la edad de doce años en la mujer y catorce en el hombre, requerida hoy para que puedan contraer matrimonio.

El impedimento que se establece por el inciso 6º y que consiste en haber dado muerte a uno de los cónyuges, como autor o cómplice para casarse con el cónyuge supérstite, no debe estar, en nuestra opinión, subordinado al objeto que haya impulsado al autor o cómplice de la muerte del cónyuge; pensamos que debe bastar el hecho con prescindencia del móvil a que se haya obedecido, que no siempre se podrá constatar y que sería difícil establecer.

Los impedimentos establecidos en los incisos 1º y 2º, consisten en el parentesco de consanguinidad, sea legítimo o ilegítimo. Como tratándose de este último, puede llegar el caso en que sea necesario probar la existencia del parentesco, si él fuere negado por los que pretenden casarse, hemos creído necesario consignar una disposición, por la cual se mantengan, las que obedeciendo a altas razones de moralidad y conveniencias sociales, contiene el Código Civil en el título V, libro 1º, sección 2ª, prohibiendo la indagación de la maternidad cuando sea con objeto de atribuir el hijo a una mujer casada, y a eso responde el agregado que proponemos, al final de los incisos de este artículo.

Por el artículo 10 se exige al menor que quiere contraer matrimonio, el consentimiento del padre, de la madre, del tutor o del juez en su caso: siendo la razón de esta disposición la incapacidad legal del menor, debe hacerse extensiva a los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, declarados incapaces por la ley, y en esto consiste la modificación que proponemos, incluyendo al curador, en su caso, entre aquellos cuyo consentimiento es necesario.

Proponemos en este capítulo dos artículos que deben completarlo: uno haciendo extensiva a los padres la obligación impuesta a los

tutores o curadores, de expresar los motivos en que se funden cuando nieguen su consentimiento, determinando en seguida las únicas causas en que pueden apoyar su negativa, y que se reducen a la existencia de algunos de los impedimentos establecidos en la ley: enfermedad contagiosa de la persona que pretende casarse con el menor; su conducta desarreglada o inmoral; haber sido condenado por robo, hurto o estafa, o cualquier otro delito que tenga pena mayor de un año de prisión, y falta de medios de subsistencia y de aptitud para adquirirlos.

Desde que se expresen las únicas causas en que puede fundarse un padre para negar su consentimiento al hijo menor que quiera contraer matrimonio, no hay razón para limitar al caso en que tenga el goce del usufructo de los bienes del hijo la obligación de manifestar la causa de su disenso; sería esta una razón de interés que no basta a justificar la excepción.

El otro artículo que proponemos, no es sino la sanción de la prohibición impuesta al menor para casarse sin la autorización necesaria; creemos que la pena, en este caso, no debe hacerse extensiva a la pérdida de una parte de su legítima, sino que debe limitarse a la privación de la posesión y administración de sus bienes hasta que llegue a la mayor edad.

Sigue el capítulo que trata del consentimiento, y debo hacer notar que es aquí donde empiezan las principales modificaciones que hemos proyectado, y que someteremos a la consideración del Senado en la discusión en particular.

Según el artículo 11 del proyecto, ya sancionado en general, es indispensable para la validez del matrimonio el libre consentimiento de los cónyuges. Nos parece bien mantener la disposición, con un pequeño cambio de redacción, que no altera su fondo, pero que en nuestro sentir precisa mejor la idea y responde con más exactitud a las disposiciones que le siguen. La modificación substancial de este artículo consiste en el agregado que proponemos, disponiendo que el consentimiento sea expresado ante el oficial público encargado del Registro Civil, y que el acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles, aun cuando las partes tuvieren buena fe.

En esta modificación, como se ve, obedecemos a la convicción que abrigamos, y que ya manifesté, acerca de la necesidad de que una ley de reforma al título del matrimonio, ya que la dictamos, responda al propósito de la reforma, y deja entrever que las modificaciones que siguen tienen por objeto como la de que se trata, y que no es otro, que el de legislar,

no sobre los efectos civiles del matrimonio, que no reclaman una reforma, sino sobre el contrato mismo que ha sido materia del debate.

Otra de las modificaciones que proponemos en este capítulo consiste en establecer que el error vicia el consentimiento, ya sea que él verse sobre la identidad del individuo físico, ya sobre la persona civil, aclarando así las dudas que podrían dar lugar a controversias haciendo difícil su decisión en materia tan delicada.

Hemos creído que estableciendo la violencia y el error como causas que vician el consentimiento, puede suprimirse el dolo, porque tomando éste en la aserción de lo que es falso o simulación de lo verdadero, en lo que puede tener de grave en este contrato, está, puede decirse, comprendido en el error, y se suprimen así causas de nulidad del matrimonio en obsequio a la subsistencia de éste.

Llegamos al capítulo que trata de las diligencias previas a la celebración del matrimonio. Siendo éste y el que se refiere a la celebración del matrimonio, los que contienen las reformas fundamentales que el proyecto se propone introducir en nuestra legislación, son también aquellos en que son más radicales las modificaciones que proponemos, porque son precisamente las disposiciones consignadas en esas capítulos las que caracterizan y marcan el espíritu y tendencia propios de la ley.

El proyecto del señor ministro deja librada la celebración del matrimonio, en cuanto a la forma, a la conciencia de los cónyuges, y sólo exige su inscripción en el Registro Civil. Partiendo de esta base, que difiere radicalmente de la que proponemos, establece en el capítulo V de que me ocupo, las diligencias que deben preceder al matrimonio, podríamos decir a la inscripción, por cuanto el proyecto no se ocupa de la celebración del matrimonio.

Esas diligencias consisten: en la presentación, que los que pretenden contraer matrimonio deben hacer por escrito, ante el juez del domicilio de la novia, manifestando su intención, a fin de que, previas las diligencias del caso, el juez declare, que no hay impedimento legal que obste a la celebración del matrimonio. Pasa en seguida a enumerar las circunstancias que deben expresarse en la solicitud y los documentos que deben acompañarse a ella, continuando con algunas disposiciones de procedimiento, según que las actuaciones se sigan o no, ante juez letrado, determinando los funcionarios que deben intervenir en ellos, y el término dentro del cual deben expedirse.

Consecuentes con la modificación propuesta en el artículo 11 del capítulo V, las que proyectamos en este, de que me ocupo, son la consecuencia lógica e ineludible de aquella modificación, y de la distinta base que adoptamos como punto de partida de la reforma.

Creemos que debe legislarse, y proponemos se legisle, el contrato de matrimonio, y en este punto capital difieren nuestras modificaciones del proyecto del señor ministro, y esto explica también y justifica las que proyectamos en este capítulo.

Ya he resumido, en breves palabras, el plan del proyecto en este punto: réstame sólo hacer conocer las modificaciones que proponemos, consecuentes con el punto de partida que nos sirve de base. Esas modificaciones son: que los que pretendan contraer matrimonio, se presenten ante el oficial público encargado del Registro Civil, no sólo en el domicilio de la novia, sino en el de cualquiera de los futuros esposos, y manifiesten verbalmente su intención, lo que deberá consignarse en una acta, firmada por el oficial público, por los futuros esposos y por dos testigos o por otra persona si los futuros esposos no supieran o no pudieran firmar.

Creyendo, como creemos y sostenemos que el matrimonio, en cuanto al acto mismo, no puede substraerse a las formalidades que son una garantía para el contrato, debíamos y así lo hemos hecho, proyectar disposiciones relativas a las diligencias que deben preceder al matrimonio y que estén en armonía con las solemnidades de que debe revestirse la celebración del acto.

Como en vez del escrito que los que pretenden contraer matrimonio deben presentar al juez, según el proyecto, proponemos que los futuros esposos se presenten ante el oficial público y manifiesten verbalmente su intención, substituímos a la solicitud el acta, porque creemos conveniente que las diligencias previas queden como la celebración del matrimonio consignadas en el registro que debe ser llevado en un libro, como lo veremos más adelante.

En el artículo 17 suprimimos el inciso 2º por el que se exige a los que quieran casarse la presentación de las partidas de nacimiento y de matrimonio de sus respectivos padres; nos parece bastante que manifiesten, como lo establece el inciso 5º del artículo anterior, los nombres y apellidos de sus padres, su nacionalidad, profesión y domicilio, sin colocarlos en la necesidad de presentar partidas que será muchas veces di-

fácil conseguir; por otra parte, no encontramos razón bastante para justificar esa exigencia.

Según el inciso 5º del artículo de que me ocupo, los menores que quieran casarse deben presentar el consentimiento expreso que exige la ley, del padre, de la madre, del tutor, o del juez en su caso. La modificación que proponemos consiste en que ese consentimiento pueda ser prestado verbalmente en ese mismo acto, en cuyo caso el que lo preste debe firmar también el acto a que se refiere el artículo anterior, el 16 del proyecto.

Más adelante se dispone que el acta en que los que quieren casarse manifiesten su intención de hacerlo, sea publicada. Adoptamos este medio consagrado por nuestra jurisprudencia, a fin de que pueda denunciarse la existencia de algún impedimento o puedan oponerse a la celebración del matrimonio los que tienen derecho a hacerlo; pero este medio o precaución, que deja sin duda que desear tratándose de personas conocidas por tener su domicilio de origen en el país, puede ser ilusorio tratándose de los que lo tienen fuera de la República. Esto nos ha inducido a consignar en este inciso una disposición por la cual aquellos cuyo domicilio de origen no sea en el país, deben presentar, además de los documentos ya mencionados, un certificado en forma de su estado civil en aquel domicilio.

Como las partidas que deben presentarse pueden encontrarse en el registro del oficial público que interviene en el acto, creemos que en este caso no habría objeto en sacar copias o testimonios de esas partidas y que bastará en tal caso referirse a ellos. A esto responde el artículo que agregamos.

Los artículos 19, 20, 21, y 22 del proyecto no tienen razón de ser una vez que se acepte la modificación substancial que proponemos respecto a las diligencias previas a la celebración del matrimonio. El procedimiento que por esos artículos se establece, desaparece en parte, y en otra se modifica por los cuatro artículos que agregamos a este capítulo, que son la consecuencia de la modificación hecha al artículo 1º del mismo.

En los artículos que hemos proyectado se establece: que el oficial público debe publicar el acta, cómo debe hacerse esa publicación y en qué domicilio o domicilios, según los que pretenden casarse, tengan o no uno mismo, o hayan cambiado de domicilio en los últimos seis meses anteriores a la publicación. Se prescribe lo que debe hacer el oficial público que reciba el acta para ser publicada; el procedimiento que

debe seguir una vez vencido el término de la publicación y el que debe observar si se deduciere ante él oposición o se denunciare la existencia de algún impedimento legal.

Terminamos este capítulo con dos disposiciones: una que prohíbe la celebración del matrimonio antes de los tres días siguientes al último de la publicación o de que se reciban los testimonios del acta que sobre publicación, oposición o denuncia debe levantar el oficial público a quien se hubiese remitido el acta para ser publicada, y otra final dejando sin efecto la publicación, si el matrimonio no se celebrase dentro de los seis meses siguientes. Queda así previsto y legislado todo lo que se relaciona con las diligencias previas a la celebración del matrimonio. Me extendería demasiado si entrara a fundar detalladamente estas modificaciones; lo haremos, si es necesario, cuando las discutamos en particular. Debo, por ahora, limitarme a dar al Honorable Senado una ligera idea de ellas.

En el capítulo VI, que trata de la oposición, las modificaciones que proponemos responden al propósito y plan a que obedecen las de los capítulos anteriores. En cuanto al artículo 23, o sea el primero de este capítulo del proyecto del señor ministro...

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Es del Poder Ejecutivo.

**Sr. Derqui.** — Está bien; del Poder Ejecutivo, no tenemos objeción que hacerle y creemos debe mantenerse.

Por el artículo 24 del proyecto del Poder Ejecutivo se da derecho para oponerse a la celebración del matrimonio a cualquier pariente en grado sucesible de los que pretendan casarse, siempre que la oposición se funde en alguno de los impedimentos establecidos.

Aceptamos en el fondo la doctrina de este artículo, pero creemos que no debe acordarse en términos tan generales el derecho de deducir oposición y que ese derecho, por lo que hace a los parientes, debe limitarse hasta los de cuarto grado de consanguinidad o afinidad. Por otra parte, siendo impedimentos la incapacidad, la minoridad y un matrimonio anterior, debe comprenderse a los representantes de los incapaces y menores y al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio, entre aquellos a quienes se da el derecho de oponerse a la celebración de éste; es por esto que en el artículo que proponemos en substitución del del proyecto, se dispone que el derecho de hacer oposición por razón de los impedimentos, compete: 1º, al cónyuge de la persona que quiera contraer otro; 2º, a los pa-

rientes de cualesquiera de los futuros esposos, dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad; 3º, a los tutores o curadores y finalmente se impone al ministerio público el deber de deducir oposición siempre que tenga conocimiento de esos impedimentos.

Proponemos la supresión del artículo 2º, en el que, previéndose el caso de que varios parientes deduzcan oposición, se dispone que nombren un solo apoderado; esto afecta a la sustanciación del juicio y debe quedar necesariamente librado a las respectivas leyes de procedimientos.

Siguiendo el plan que nos hemos trazado, hemos creído deber completar las disposiciones relativas a los que tienen derecho de deducir oposición y nos hemos dicho: si la ley prohíbe a la mujer contraer matrimonio antes de los diez meses de disuelto o anulado el anterior o antes del alumbramiento, si quedó encinta, es razonable acordar a los parientes del marido en grado sucesible el derecho de deducir oposición y se lo acordamos por el artículo que proponemos a continuación del en que se enumeran los que pueden hacer oposición.

El proyecto pasa en seguida a ocuparse del juez ante el cual puede deducirse la oposición, designando a aquel ante quien se hayan iniciado las diligencias; pero debiendo practicarse éstas ante el oficial público encargado del Registro Civil, la modificación de este artículo se impone y proponemos la siguiente: «La oposición puede deducirse ante cualquiera de los oficiales públicos que haya publicado el acta a que se refiere el artículo 17».

En cuanto al término u oportunidad para deducir oposición, nada tenemos que observar, y por lo que hace a lo que debe expresarse en el acta o escrito de oposición, mantenemos el artículo del proyecto, limitándonos a ampliar el inciso 5º, disponiendo lo que debe hacer el oficial público cuando la oposición se deduzca verbalmente. La razón por la cual aceptamos que la oposición pueda hacerse también por escrito, es obvia; tiene por objeto facilitar el medio de impedir que se celebre un matrimonio con algún impedimento que pueda causar su nulidad.

Se dispone en seguida que sea el oficial público el que dé conocimiento de la oposición a los futuros esposos, y se le prohíbe celebrar el matrimonio si alguno de éstos reconoce la existencia del impedimento.

He dicho ya, como se recordará, que la oposición puede deducirse ante cualquiera de los oficiales públicos que hubiese publicado el

acta; si el oficial público ante el cual se deduzca la oposición no fuere el del lugar en donde deba celebrarse el matrimonio, remitirá al de éste, dentro de veinticuatro horas, copia del acta, con los documentos presentados; pero si la oposición no se fundase en alguno de los impedimentos legales, la rechazará de oficio, levantando acta.

Ya hemos visto lo que debe hacer el oficial público, cuando alguno de los futuros esposos reconozca la existencia del impedimento que sirva de base a la oposición; pero si ninguno de ellos lo reconociera, deberán expresarlo ante el oficial público, dentro de los tres días siguientes al de la notificación; éste levantará acta, y remitirá al juez letrado de lo civil copia autorizada de todo lo actuado, con los documentos presentados, suspendiendo la celebración del matrimonio. Los tribunales civiles deberán sustanciar y decidir la oposición en juicio sumario, con citación fiscal, remitiendo al oficial público copia legalizada de la sentencia que se pronunciase, para que haga en el registro la anotación correspondiente. Si la sentencia desestimase la oposición, procederá a celebrar el matrimonio una vez que ella haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

A más de los que pueden oponerse a la celebración del matrimonio, se permite a cualquier persona denunciar la existencia de alguno de los impedimentos establecidos en este caso; y con el objeto ya manifestado, de evitar en cuanto es posible la celebración de matrimonios que puedan anularse, hemos creído no deber colocar al denunciante en la necesidad de seguir un juicio que, aunque sumario, podría retraerlo de hacer la denuncia, y por eso, proponemos que en este caso, el oficial público remita la denuncia al juez letrado de lo civil, quien dará vista de ella al ministerio público, y éste, dentro de tres días, deducirá oposición, o manifestará que considera infundada la denuncia.

No podía ocultársenos los inconvenientes que puede traer consigo esta facilidad para formular una denuncia, y los abusos a que se presta; pero creemos haber salvado la dificultad, con una disposición que tiene por objeto evitar denuncias sin causas que las justifiquen: la dejo ya mencionada.

Los artículos del 43 al 48 inclusive del proyecto, quedan suprimidos, unos porque no se concilian con modificaciones hechas, y otros porque sus disposiciones están comprendidas en otros artículos de los que proponemos.

Como se ve, al tratar de la oposición, hemos

tenido especial cuidado de determinar con precisión, cuáles son las causas en que puede fundarse o que pueden dar lugar a ella; quiénes tienen derecho a deducirla, y las manifestaciones que deben hacer, así como la referencia de los documentos que prueben la existencia del impedimento; la oportunidad en que puede ser hecha, y la responsabilidad a que puede dar lugar, según la persona que la deduzca.

Finalmente, nos limitamos a establecer que la oposición debe sustanciarse en juicio sumario, porque, dada nuestra organización política, no podemos entrar a prescribir procedimientos, fuera del territorio en que la Nación tiene exclusiva jurisdicción.

Reuniendo así, en este capítulo con precisión y claridad, todo cuanto se relaciona con la oposición, se facilita el conocimiento de la ley y su recta aplicación. A este plan o sistema obedecen las modificaciones que hemos proyectado.

Terminado el capítulo de la oposición, en el que hemos proyectado las modificaciones que he hecho conocer al Senado con la brevedad que he ha sido posible, paso a ocuparme del que se refiere a la celebración del matrimonio. Es en este capítulo, donde se formula la reforma más fundamental de nuestra legislación en materia de matrimonio.

El proyecto del Poder Ejecutivo parte de la base, de que, los que quieran casarse, pueden hacerlo libremente con arreglo a los dictados de su conciencia, sin exigir, para que el matrimonio se reputé legalmente celebrado a los efectos civiles, otro requisito que el de su inscripción en el Registro Civil, de conformidad a las disposiciones que establece, y que debo reasumir brevemente, «fin de que me baste hacer una ligera reseña de las modificaciones que proponemos, para que el Honorable Senado se forme una idea exacta de ellas.

Necesito recordar, que las diligencias previas a la celebración del matrimonio, que según el proyecto deben practicarse, empiezan por la presentación que los que quieran casarse, deben hacer por escrito ante el juez del domicilio de la novia, manifestando su intento, y pidiéndole que declare, previas las diligencias del caso, que no hay impedimento legal. En seguida pasa a reglamentar ese juicio, como ya lo hemos visto.

En el capítulo, «De la celebración del matrimonio» de que me ocupo ahora, empieza el proyecto por establecer, que el juez dará a los futuros esposos, copia legalizada del auto ejecutivo, en que se declara no haber impe-

dimento para el matrimonio. Con esta copia, los futuros esposos deben presentarse en la oficina del Registro Civil, manifestando que se han casado de conformidad con los dictados de su conciencia, y que quieren inscribir su matrimonio, a fin de que éste produzca efectos civiles. Si los comparecientes manifestasen no haberse casado de modo alguno, se harán constar los requisitos establecidos y la manifestación que aquéllos harán de su voluntad de casarse, tomándose respectivamente por marido y mujer.

Los demás artículos se refieren a la inscripción, y por uno de ellos no se reconoce más matrimonio, a los efectos civiles, que los que consten en los registros públicos, con las formalidades establecidas.

Se ve, desde luego, que de lo que se trata en este capítulo del proyecto, es de la inscripción del matrimonio, no de su celebración, con la sola excepción del caso, en que, los que soliciten la inscripción, manifiesten que no se han casado de ninguna manera, y expresen su voluntad de casarse.

Consecuentes con la convicción que tenemos, y que ya manifesté, de que tratándose de un contrato como el de matrimonio, y teniendo el derecho perfecto de legislarlo, como tal contrato, no podemos dispensarlo de las formalidades de que, como una garantía, se rodea a ciertos contratos, formulamos en este capítulo del proyecto, modificaciones substanciales, que responden a esas convicciones y al propósito que debe inspirar, y único que puede justificar la reforma.

Creemos que la celebración de un acto tan importante, como que afecta la constitución de la familia y de la sociedad, no puede quedar librado a la conciencia, en cuanto a las solemnidades que constituyen la forma en que deba ser celebrado, porque esto importaría dispensarlo de ella, a voluntad de los contrayentes, cuya sola declaración basta para la inscripción, surtiendo ésta todos los efectos civiles, según el proyecto.

Partimos, pues, en este punto, de una base distinta, y así proponemos, que el matrimonio se celebre ante el oficial público encargado del Registro Civil, en su oficina, públicamente, compareciendo personalmente los futuros esposos o sus apoderados, en presencia de los testigos y con las formalidades que esta ley prescribe.

Pensamos que, si legislamos sobre el contrato de matrimonio, éste no puede, no debe celebrarse de otra manera.

Establecido cómo debe celebrarse el matri-

monio, viene la excepción de cuando los futuros esposos estén imposibilitados de concurrir a la oficina, permitiéndoles, en tal caso, que puedan celebrarlo en su domicilio, debiendo hacerlo, entonces, en presencia de doble número de testigos.

En el deseo de no fatigar demasiado la atención de la Cámara, ya que tengo que exponerle las modificaciones que proponemos, me limitaré a las principales.

En el acto de la celebración del matrimonio el oficial público, debe dar lectura a los futuros esposos, de los artículos de la ley en que se establecen las obligaciones que contraen y recibirá de cada uno de ellos personalmente la declaración de que quieren respectivamente tomarse por marido y mujer, declarándolos unidos en matrimonio en nombre de la ley.

Se ha querido ver en esta ley, señor presidente, un ataque o acto de hostilidad a la religión, quizá por la sola razón de no mantener las disposiciones del Código Civil, que dejaban confiado a los ministros de aquella, lo que se relaciona con la celebración del contrato. No creemos necesario contestar esto, cuando se trata del ejercicio de una facultad, para nosotros, innegable; pero si quisiéramos hacerlo, nos bastaría para ello, la disposición que consignamos, según la cual el oficial público no podrá oponerse a que los esposos, después de prestar consentimiento ante él, hagan bendecir en el mismo acto su unión, por un ministro de su culto.

En cuanto a lo que debe hacerse constar en el acta de la celebración del matrimonio, mantenemos los incisos 1º, 2º y 3º del artículo 52 del proyecto que, aunque en éste se refieren a la inscripción, son aplicables al acto de celebración. En otros incisos, hasta el 11, agregamos algo más que debe hacerse constar, como el nombre y apellido del cónyuge muerto, cuando alguno de los cónyuges ha sido ya casado. Tratándose de matrimonio de menores o incapaces: el consentimiento de los padres, tutores o curadores, o en su caso, el supletorio del juez, exigido por la ley; la publicación del matrimonio, su fecha y la mención de si hubo o no oposición y de su rechazo; la manifestación, de los contrayentes de que se toman por esposos, y la declaración del oficial público de quedar unidos en nombre de la ley; el reconocimiento que los contrayentes hagan de sus hijos naturales; nombre, apellido, edad, etcétera, de los testigos, y finalmente la mención del poder, cuando el matrimonio se celebre por apoderado. Así, en el acta que debe ser redactada y firma-

da inmediatamente por todos los que intervienen en el matrimonio, quedará consignado, haber sido llenadas todas las formalidades, de que la ley rodea actos de esta naturaleza.

Este contrato, por sus fines, por cierta especialidad que lo distingue de los demás, sin perder su carácter de contrato, no puede seguir uniformemente las reglas o principios que deciden de la subsistencia de los otros, según las cláusulas a que ellos se subordinen. Así hemos creído deber consignar una disposición, por la cual la declaración de los contrayentes de que se toman respectivamente por esposos, no pueda someterse a término ni a condición alguna.

Dadas las funciones que esta ley encomienda al oficial público, deben ser ellas de tal manera claras y precisas, que no den lugar a duda alguna, ni dejen a su discreción nada de lo que pueda referirse a la celebración misma del acto. Por esto proponemos disposiciones según las que el oficial público no podrá rehusar la celebración del matrimonio sino en virtud de las causas establecidas en la ley; pero como pudiera suceder que no se deduzca oposición, ni se denuncie la existencia de algún impedimento y que éste resulte de alguno de los documentos presentados, en este caso se prohíbe al oficial público proceder a la celebración del matrimonio, debiendo hacer constar en un acta su negativa y los motivos en que la funde, dando testimonio de ella a los interesados, quienes podrán ocurrir al juez letrado si consideran infundada la negativa.

Hemos creído no deber terminar este capítulo, sin ocuparnos de una excepción que de suyo se impone. Quedan establecidas las formalidades de que indispensablemente debe ir acompañado el acto de la celebración del matrimonio; pero hay un caso en que no deben ser exigidas, so pena de imposibilitar esa celebración, dando lugar, así, a los perjuicios que puede traer consigo la no celebración del matrimonio. Me refiero al caso excepcional, pero posible, y que más de una vez se ha producido, de que uno de los que pretendan casarse, se encuentre en inminente peligro de muerte, de tal manera que corra el riesgo de que ésta sobrevenga antes de que puedan llenarse las formalidades prescriptas por la ley; este caso no está previsto en el proyecto, ni lo encontramos legislado en las leyes que hemos consultado. Notado el vacío, debíamos llenarlo, y a eso responden dos artículos que proponemos.

Por uno de ellos se dispone que, previa justificación, con el certificado de un médico, y donde éste no existiere, con el testimonio de dos vecinos, que alguno de los que desean ca-



sarse se encuentra en peligro de muerte, el oficial público procederá a la celebración del matrimonio, con prescindencia de todas o de algunas de las formalidades que deben precederlo, debiendo hacer constar tales circunstancias en el acta.

El caso puede producirse distante de la oficina del oficial público en lugares poco poblados. También lo hemos previsto. En tal situación el matrimonio podrá celebrarse ante cualquier funcionario judicial, quien deberá levantar acta de la celebración, haciendo constar las circunstancias requeridas, con excepción de las que se refieren a la publicación, y a la mención de si hubo o no oposición, y remitirá el acta al oficial público encargado del Registro Civil para que la protocolice. En los dos casos el acta de matrimonio será publicada durante ocho días en la forma establecida.

Dispensado el matrimonio, en los casos previstos, de las formalidades que deben precederlo y que son inconciliables con la premura de la situación en que se encuentre uno de los que quieran contraerlo, su validez, como en los otros casos, dependerá de que haya sido celebrado sin impedimento.

Como se ve, señor presidente, en este capítulo queda completamente legislado el acto de la celebración del matrimonio, obedeciendo siempre al plan que nos hemos trazado.

Estamos de perfecto acuerdo con las disposiciones que contiene el capítulo VIII del proyecto, por las que se establecen los derechos y obligaciones de los cónyuges. En este capítulo no proponemos sino dos modificaciones: una referente a los casos en que los tribunales pueden suplir la autorización que la mujer necesita del marido, y otra respecto a los bienes que quedan obligados por actos o contratos de la mujer, no autorizada por el marido o autorizada por el juez, contra la voluntad de aquél.

La disposición del artículo 69 del proyecto limita la facultad de los tribunales para suplir la autorización del marido, a los casos de ausencia o impedimento de éste; y pensamos que debiendo los tribunales proceder con conocimiento de causa, al suplir la autorización, no hay razón bastante para no hacer extensiva esa facultad al caso en que el marido la rehúsa sin motivo fundado, y la autorización fuere necesaria o útil a la mujer o a la sociedad conyugal.

El artículo 72 del proyecto, consecuente con disposiciones anteriores, al determinar los bienes que quedan obligados por los actos y contratos de la mujer, sólo se refiere a aquellos

ejecutados sin autorización del marido, ni del juez; pero, como proponemos que éste pueda suplir la autorización del marido en el caso que él la rehúse sin motivo fundado, creemos debe hacerse extensiva a este caso la disposición respecto a los bienes que quedan obligados por los actos y contratos celebrados por la mujer con esta autorización, modificación tanto más justificada por cuanto, aparte de razones de otro orden que pudieran invocarse, tiene por base, por una parte, la necesidad, y por otra, la utilidad que de ella puede reportar la sociedad conyugal.

Al capítulo de que me he ocupado sigue el del divorcio. Las modificaciones que proponemos no afectan precisamente el fondo de las disposiciones que él contiene: puede decirse que ellas tienden a aclarar las causas que pueden motivarlo.

Al enumerar el proyecto las causas de divorcio, incluye entre ellas la «sevicia» y entra en seguida a explicarla diciendo: «si es tal que los cónyuges no puedan vivir reunidos, sin peligro de la vida de uno de ellos o de grave daño corporal». La acepción jurídica de la palabra «sevicia» hace innecesaria esa explicación, comprende la crueldad excesiva y esto basta, aunque no corra peligro la vida. Creemos por tanto que basta con que se diga: «la sevicia».

Según el inciso 5º del artículo 76 del proyecto, la injuria, para ser causa de divorcio, no basta que sea grave, sino que debe ser hecha por un cónyuge contra el honor del otro; pero la injuria puede no ser hecha contra el honor, sin dejar de ser grave, y no hay entonces razón para establecer esta limitación. Opinamos que basta que se diga «injurias graves», y ampliar el inciso, estableciendo que el juez, para apreciar la gravedad de la injuria, tome en consideración la educación, la posición social y demás circunstancias de hecho que puedan presentarse.

En cuanto al inciso 7º, creemos que debe precisarse de modo que no dé lugar a dudas ni se preste a interpretaciones que por lo menos darían lugar a controversias que conviene evitar en lo posible. El «abandono» se supone que debe ser voluntario y malicioso; pero debe expresarse así y fijar el término que debe transcurrir para que pueda ser considerado como causa de divorcio. Por otra parte, no puede ocultarse la conveniencia de que a la demanda de divorcio preceda una intimación judicial al esposo culpable, para que restablezca la vida común en un término dado, y en esto consiste la modificación que proponemos.

Dada la naturaleza del matrimonio, sus altos fines, los móviles, los sentimientos que debemos suponer impulsan a los que lo contraen, creemos que no debe mantenerse el inciso 8º. Si el matrimonio, entre otros fines, tiene, como dice una ley de Partidas, el de ayudarse a llevar el peso de la vida y participar de una misma suerte, es contrariar ese fin noble, autorizar a un cónyuge a abandonar al otro que se ve postrado por una enfermedad; es quizá obligarlo a pedir a la caridad lo que, apoyada en la ley, le negara la persona a quien se encuentra ligado de una manera tan especial y solemne.

Establecido en qué consiste el divorcio, las causas que pueden motivarlo, las medidas que antes de ser decretado pueden adoptarse, respecto a la esposa, al cuidado de los hijos y a los alimentos que deben prestarse, hemos creído que no debía terminar este capítulo, sin una disposición relativa a la extinción de la acción de divorcio, y al efecto proponemos un artículo según el cual se extingue esa acción y cesan los efectos del divorcio ya declarado cuando los cónyuges se han reconciliado después de los hechos que autorizaban la acción o motivaron el divorcio, determinando a la vez el caso en que la ley presume esa reconciliación que efectuada restituye todo al estado anterior a la demanda de divorcio. Es nuestra opinión que quedan así completas las disposiciones sobre el divorcio.

En el capítulo que trata de los efectos del divorcio nos limitamos a proponer se mantenga el artículo del Código Civil, que se suprime en el proyecto, artículo en el que se dispone que cuando por acusación criminal de alguno de los esposos contra el otro hubiese condenación a prisión, reclusión o destierro, ninguno de los hijos de cualquier edad que sea «deberá ir», dice el código, «podrá ir», proponemos nosotros, con el que deba cumplir alguna de esas penas. Las razones que pueden aducirse en apoyo de esta previsorá excepción hecha a la regla establecida en el artículo anterior, o sea el 84 del proyecto, son tan manifiestas que me abstengo de darlas, reservándome hacerlo si fuere necesario, en la discusión en particular.

Nada tenemos que observar, respecto a las disposiciones del capítulo sobre la disolución del matrimonio.

Al capítulo sobre disolución, sigue el que se ocupa de la nulidad del matrimonio. Viene en seguida el que establece los efectos de la nulidad, y a continuación de éste, el que trata del matrimonio anulable. Ahora bien, como los efectos de la nulidad son extensivos tanto a los

matrimonios de que se ocupa el capítulo XII como a los comprendidos en el XIV, con diferencia de la fecha, en que la nulidad surte sus efectos, hemos creído, consecuentes con el plan que nos hemos trazado, que deben comprenderse en un solo capítulo de la ley, las disposiciones referentes al matrimonio nulo y al anulable, y ocuparse después de los efectos de la nulidad, que les son comunes.

Empezamos por establecer, que el matrimonio es absolutamente nulo, cuando se celebra existiendo alguno de los impedimentos establecidos con excepción del de la edad, y la locura, causas que pueden desaparecer.

Lo nulidad puede ser demandada por el cónyuge que ignoró la existencia del impedimento, y puede serlo también, por aquellos a quienes se reconoce, en su caso, el derecho de oponerse a la celebración del matrimonio.

Pasamos en seguida a determinar los casos en que el matrimonio es anulable.

El primero es, cuando fuere celebrado con el impedimento proveniente de la falta de edad requerida en los contrayentes. Esta nulidad puede ser demandada por los mismos cónyuges, y por los que habrían podido oponerse a la celebración del matrimonio; pero no podrá ser demandada la nulidad, después que el cónyuge o los cónyuges incapaces, hubieran llegado a la edad legal, ni cuando la esposa hubiese concebido, cualquiera que fuese la edad.

El segundo caso, es el del matrimonio celebrado por un loco. Esta nulidad puede como la anterior, ser demandada por los que habrían podido oponerse a la celebración del matrimonio, y por el mismo incapaz, cuando recobrase la razón, siempre que no hubiese continuado la vida maridable. Podrá asimismo ser demandada por el otro cónyuge, si ignoró la incapacidad al tiempo de la celebración del matrimonio y no hubiese hecho vida maridable después de conocida la incapacidad.

Ya hemos visto, que la violencia, y el error, cuando éste versa sobre la identidad del individuo físico o de la persona civil, vician el consentimiento. La nulidad, en este caso, sólo podrá ser demandada por el cónyuge que ha sido inducido en error, o sufrido la violencia. La acción se extingue si después de conocido el error, o de suprimida la violencia, ha habido cohabitación durante un tiempo dado.

La impotencia manifiesta y absoluta de uno de los cónyuges, anterior a la celebración del matrimonio, da lugar a una acción de nulidad; pero corresponde exclusivamente al otro cónyuge, deducirla.

Como han podido verlo los señores senadores, por la ligera exposición que acabo de hacer, al determinar la causa que puede motivar una acción de nulidad, la acompañamos de las disposiciones acerca de las personas que pueden deducirla, y terminamos por establecer cuándo se extingue la acción. Agrupadas así las prescripciones pertinentes a cada caso, se facilita la comprensión de la ley y su buena aplicación, eliminando el inconveniente que puede provenir de tener que buscar, en disposiciones dispersas las que rigen cada caso.

Opinamos que debe mantenerse el artículo 92 del proyecto, que es el primero de éste, en el capítulo sobre nulidad de que me ocupo. Por ese artículo, la acción de nulidad no puede intentarse sino en vida de los dos esposos; pero creemos que debe completarse esta disposición, estableciendo una excepción que no debe dejar de consignarse, y proponemos que se agregue al artículo lo siguiente: «Uno de los cónyuges puede, sin embargo, deducir en todo tiempo la que le compete contra un segundo matrimonio contraído por su cónyuge: si se opusiese la nulidad del primero, se juzgará previamente esta oposición». Sin esta ampliación la disposición sería deficiente y podría dar lugar a serias cuestiones.

Según el proyecto, las disposiciones sobre nulidad de los actos jurídicos, son extensivas a la nulidad del matrimonio. Si estudiamos las causas de nulidad de los actos jurídicos, veremos que ofrecería graves inconvenientes el consignar una disposición tan general, que, por otra parte, no tendría objeto, desde que en las modificaciones que proponemos, están previstas y claramente expresadas, todas aquellas causas que, dada la naturaleza y fines del contrato que nos ocupa, pueden ser bastantes para servir de fundamento a una acción de nulidad. Creemos, pues, que este artículo debe suprimirse.

Según el Código Civil, el fallecimiento presunto del cónyuge ausente o desaparecido, no habilita al otro para contraer matrimonio, pero, ¿y si lo contrae, violando la prohibición legal? el proyecto no prevé el caso. Pronunciar la nulidad, sin que se pruebe la insubsistencia de la presunción legal, sería a nuestro entender, demasiado grave. Con el objeto de salvar esta dificultad, llenando el vacío que se nota, proponemos un artículo por el que se dispone, que el matrimonio celebrado por el cónyuge de un ausente, con presunción de fallecimiento, no puede ser impugnado, sino probando la existencia del ausente.

En el capítulo en que se trata de los efectos de la nulidad del matrimonio, así como en el de las segundas o ulteriores nupcias, no tenemos modificación alguna que proponer.

A ese capítulo sigue uno de «Disposiciones transitorias», con el que termina el proyecto. Creemos que nuestra tarea sería incompleta, sino agregáramos al proyecto, un capítulo de «Disposiciones generales», único en que podríamos consignar disposiciones importantes e indispensables, que no se encontrarían bien en los otros.

Hemos traladado a este capítulo, algunas de las disposiciones pertinentes del proyecto; pero como están impresas y tiene el Senado conocimiento de ellas, sólo me ocuparé de las que proponemos, que, por otra parte, no son sino consecuencias lógicas que inevitablemente se desprenden de las modificaciones que hemos formulado.

El matrimonio debe probarse con el acta, se entiende que tratándose de los celebrados con posterioridad a la vigencia de esta ley, y así se expresa; pero pudiera ocurrir la imposibilidad de presentar el acta o su testimonio, en tal caso, y previa justificación de la imposibilidad, el matrimonio podrá probarse por los medios de prueba que el derecho admite, salvo restricciones acerca de lo que constituye la posesión de estado, por razones fáciles de comprender y de que me ocuparé, si fuere necesario, cuando lleguemos a este punto en la discusión en particular.

La imposibilidad de presentar el acta, no autoriza la admisión de otros medios de prueba, sino cuando no ha existido el registro o ha sido destruido o perdido en todo o en parte; cuando estuviese incompleto o hubiere sido llevado con irregularidad, o cuando el oficial público hubiere omitido consignar el acta en el registro.

La sentencia que decida que un acta ha sido destruida, perdida u omitida, será comunicada al oficial público, quien deberá transcribirla en un registro supletorio que se llevará con las formalidades establecidas. Como la destrucción, falsificación o pérdida de un acta de matrimonio, puede dar lugar a una acción criminal, se inscribirá también en el registro la sentencia que declare la existencia del matrimonio.

A las disposiciones relativas a la prueba del matrimonio, siguen las que se refieren al ejercicio de la acción de divorcio. Empezamos por establecer, que esta acción, debe intentarse en el domicilio de los cónyuges. Pudiera ocurrir

que el marido lo tuviera fuera del país, cuando se trata de deducir la acción y entonces podrá intentarse ésta, ante el juez del último domicilio que aquél haya tenido en la República.

La sentencia que recayese en todo juicio sobre divorcio o nulidad de matrimonio, una vez ejecutoriada, debe ser inmediatamente comunicada por el juez de la causa al oficial público, a fin de que, si el matrimonio se celebró con posterioridad a la vigencia de esta ley, lo anote al margen del acta de matrimonio, y si se celebró con anterioridad a la fecha indicada, hará esa anotación en un registro especial.

En cuanto a la jurisdicción a la cual corresponde el conocimiento y decisión de las causas sobre divorcio o nulidad de matrimonio, nada dice el proyecto. Atribuimos esta omisión a que el señor ministro no habrá creído necesaria una disposición expresa al respecto por quedar eliminado el artículo del Código Civil en que se atribuye a la autoridad eclesiástica el conocimiento y decisión de dichas causas.

Tememos que el silencio de esta ley sobre punto tan capital, pueda dar lugar a discusión, o pretexto a dudas, que pudieran querer fundarse en algunas disposiciones del mismo proyecto. Según el artículo 1º de éste, quedan modificadas las disposiciones del título del Código Civil que trata del matrimonio, en la forma y con arreglo a lo que se establece en el proyecto, y como éste nada dice sobre jurisdicción para entender en las causas de divorcio o nulidad, acaso no faltaría quien pretendiera, que subsiste aquella disposición del código, no modificada. No es esta sin duda la mente del proyecto; pero conviene consignar una disposición expresa al respecto, y al efecto, proponemos un artículo que establece: que «el conocimiento y decisión de las causas sobre divorcio o nulidad de matrimonio celebrando antes o después de la vigencia de esta ley, corresponde a la jurisdicción civil».

Como no en toda la República existe el Registro Civil, debe preverse el caso en que en algún punto no se estableciese el registro en la fecha en que empiece a regir esta ley. Proponemos, por esto, un artículo en el cual se dispone: que en la capital de la República, en los territorios nacionales y en las provincias donde exista Registro de Estado Civil, las funciones encomendadas por esta ley a los oficiales públicos, serán desempeñadas por los jefes o encargados de las secciones del Registro Civil, y donde no lo hubiere, por la autoridad

municipal en su defecto, por la judicial del distrito. Así se coloca a los que quieran casarse, en la posibilidad de hacerlo con sujeción a la ley, desde el momento mismo en que empiece la vigencia de ella.

En esta como en toda ley, no se puede, so pena de hacerla ineficaz, prescindir de la sanción que debe acompañar a sus disposiciones, para que no puedan ser impunemente violadas. Completamos, pues, este capítulo de disposiciones generales, con algunos artículos, estableciendo las penas en que incurrirán los que violen la ley.

Respecto al oficial público, graduamos las penas que se establecen, por la gravedad de la omisión en que incurriere, ya se trate de las diligencias previas a la celebración del matrimonio, ya de las formalidades o solemnidades que deben observarse en su celebración.

Terminamos este capítulo disponiendo que la aplicación de las penas establecidas será pedida por el ministerio público ante el juzgado competente.

Comprendo, señor presidente, que he abusado un tanto de la consideración del Senado, ocupando su atención por más tiempo del que deseara: sírvame de disculpa haber hecho lo posible, por ser breve en la exposición de las modificaciones que hemos proyectado y que dejamos entregadas a su decisión, alimentando la esperanza, de que pueden servir de algo, para que esta ley, tan trascendental, responda al propósito que la inspira.

Me será no obstante, permitido entrar en algunas breves consideraciones, de que no puedo, ni debo prescindir, dada la importancia de la cuestión que se debate y de las modificaciones que proponemos.

Los que combaten la ley de matrimonio civil, no pueden menos de reconocer, y reconocen que el matrimonio es un contrato. La importancia de este contrato, perfectamente marcada, por su influencia en la constitución de la familia, base de la sociedad, y por sus altos fines sociales, es algo que está fuera de toda discusión, y si necesitáramos algo más para corroborarlo, me bastaría recordar, que de todos los contratos conocidos, es el único que ha sido considerado digno de ser elevado a sacramento.

Si, pues, estamos conformes, en que el matrimonio es de tan señalada importancia y trascendencia, no puede dejar de reconocerse, que él debe, que no puede dejar de ser incluido, entre aquellos contratos, que los jurisconsultos colocan en la categoría de los solemnes, es de-

cir, de aquellos que deben celebrarse bajo forma determinada a tal punto, que, prescindiéndose de esa forma, no son considerados tales contratos, ni surten efecto alguno.

La forma no está, pues, establecida en estos contratos, como simple medio probatorio, no; y para convencerse de ello, basta fijarse en que se hace depender de la observancia de ella, la validez misma del contrato, lo que importa decir que la forma está establecida y es exigida como condición esencial y constitutiva del contrato.

Siendo esto así, y desde que, los que combaten el pensamiento que entraba el proyecto, no pueden menos que reconocer, como reconocen, que el matrimonio es un contrato, no pueden desconocer sin incurrir en evidente contradicción, la necesidad manifiesta, ineludible de rodearlo de todas aquellas formalidades que constituyen eso que se llama la forma del contrato, y que, si el dematrimonio decide de la constitución de la familia y de la sociedad, es esta una razón más y bien concluyente, para que no pueda, para que no deba en cuanto a la forma de su celebración, ser excluido de la única legislación que puede fijar sus efectos civiles y que garantiza las obligaciones que de él nacen.

Si afrontamos la reforma de nuestra legislación en materia de matrimonio, y el carácter de contrato que es de la esencia de éste, demuestra la facultad evidente que tenemos para hacerlo, debemos forzosa y necesariamente legislar sobre la forma en que debe realizarse este contrato, es decir, en que debe celebrarse el matrimonio, y no limitarnos a una simple inscripción, dejando lo substancial o sea la forma, a la conciencia de los contrayentes. Es esta razón jurídica, sobre la que no me extiendo por ocupar lo menos posible la atención del Senado, la que justifica plenamente, en nuestra opinión, las modificaciones substanciales que proponemos, especialmente en los capítulos en que el proyecto se ocupa de la celebración del matrimonio, y de las diligencias previas que deben precederlo.

No puedo prescindir de las objeciones hechas al proyecto en general, o sea a la idea fundamental sometida por el Poder Ejecutivo a la consideración del Congreso, y me será permitido entrar en algunas consideraciones, por cuanto esas objeciones son con mayor razón aplicables en su parte substancial a las modificaciones que proponemos.

Los que impugnan el proyecto, han hecho una revista de los antecedentes históricos que

pudieran servir al objeto que se proponen; han invocado, en lo que a su juicio era pertinente a la cuestión, las decisiones de los concilios, las declaraciones formuladas y las doctrinas sostenidas por los papas, buscando en esas fuentes un punto de apoyo, para sostener la pretendida facultad del poder espiritual para dictar disposiciones sobre todo lo que se relaciona con la celebración del matrimonio.

No voy a entrar, señor presidente, en esas consideraciones históricas, de que se ha hecho el tema principal del debate, porque no entra en mi propósito; voy a ocuparme de la cuestión bajo otra fase, prescindiendo hasta donde sea posible, de esos antecedentes históricos, por más que ellos me proporcionarían base bastante para sostener mis opiniones.

Quiero empezar por declarar que tengo el más profundo respeto por la religión y por la Iglesia. Es un organismo completo y creo que, las decisiones de sus concilios, de sus pontífices, tienen una autoridad innegable, siempre se entiende, que se mantengan dentro de los límites en que debe contenerse el poder espiritual y fuera de los cuales no puede ejercitar su autoridad; pero cuando ésta abandona su esfera propia, creo también indiscutible el perfecto derecho que asiste al poder temporal, para no permitir que se menoscaben las facultades que le son privativas, que se invada un terreno en que le está vedado entrar, al poder espiritual.

He dicho, señor presidente, que no pienso entrar en excursiones históricas; pero debemos recoger la saludable enseñanza que deja tras sí, la interesantísima revista hecha en el debate. Ella nos muestra, que las cuestiones que los que ejercen el poder espiritual promueven hoy, con la tendencia manifiesta de despojar al civil o político de facultades inherentes a sus funciones y a sus altos fines, no surgieron cuando predicaba sus sabias doctrinas el fundador de la Iglesia, que enseñaba a sus discípulos a obedecer al César, y como si esto no fuera bastante, y para dejar más gráficamente demarcada la línea que separa el poder que él venía a crear, distinto e independiente, del civil o político, que estaba establecido, les dijo, que su reino no era de este mundo, sino del otro.

Entonces, pues, no puede haber confusión de autoridad entre la Iglesia y el Estado: son dos organismos, dos instituciones completamente distintas e independientes. Defieren en sus medios de acción y difieren en sus fines: la una en lo espiritual, no dispone para dar sanción a sus preceptos, sino de medios espirituales; el Estado por el contrario tiene a su

alcance para compeler al cumplimiento de sus leyes, medios adecuados a la índole y naturaleza de sus funciones, al ejercicio de su acción propia.

De los antecedentes recordados, de las disposiciones de una legislación de que sólo quedan algunos vestigios, antecedentes y disposiciones invocadas por los que impugnan el pensamiento que envuelve el proyecto, buscando en ellos algo que disculpe la extraña actitud asumida por autoridades de la Iglesia en una época desgraciada, de todo esto resulta, que estas cuestiones de facultades, tienen por origen las concesiones que la autoridad espiritual obtuviera de la temporal, acaso en retribución de la cooperación que prestó a ésta y que podía ofrecerle, merced a la poderosa influencia adquirida por la autoridad y pureza de las máximas y doctrinas establecidas por el fundador de la Iglesia.

El consorcio de esos poderes, que han debido y deben desenvolverse perfectamente separados, ha estimulado esta tendencia de absorción, que se manifiesta de parte del poder espiritual, por la pretensión de someter a sus prescripciones la celebración del matrimonio aun como contrato, y que por el solo hecho de serlo, sale por completo de los límites trazados a su autoridad, como se manifestaría por parte del poder civil o político, si éste pretendiera establecer cómo deben administrarse los sacramentos o celebrarse las ceremonias del culto.

La solución de esta como de otras cuestiones, cuando se las debate en un terreno puramente abstracto, ofrece sus dificultades; pero se simplifica, planteándolas y definiendo sus términos.

El matrimonio, para sostenedores y adversarios de la ley que discutimos, es un contrato y es a la vez un sacramento. Sobre este punto no hay divergencia de opiniones. Tenemos, pues, una base, un punto de partida, común. Debemos empezar entonces por recordar, por definir, lo que es contrato y lo que es sacramento y veremos si la autoridad espiritual, en nombre o a la sombra de éste, que es de su jurisdicción, puede abrogarse la que complete exclusivamente al Estado, en todo cuanto se relaciona con el contrato, empezando como es natural, por la forma en que deba ser celebrado, como tal contrato.

No voy a buscar en autores que por razón de creencias puedan ser sospechosos de parcialidad, para los que combaten el proyecto tal como lo sostenemos, ideas u opiniones en

apoyo de mis convicciones, traducidas en las modificaciones que proponemos, recurriré a autoridades que pertenecen notoriamente a la comunión católica, y estudiaré la cuestión bajo la fase principal en que, en mi opinión, debemos debatirla.

Principiemos por el sacramento, por más que debiéramos empezar por el contrato, desde que éste es la materia de aquél.

Ninguno mejor que un canonista, para decirnos lo que es sacramento. Oigamos a Devoti, autor de un tratado de *Derecho Canónico*. Según esta autoridad, «Sacramento» ya quiere decir juramento, ya la cantidad pecuniaria que los litigantes solían depositar en el templo o en manos del pontífice; ya es equivalente a arcano y a misterio; ya se aplica a cualquier rito o ceremonia sagrada, y es gracia invisible, instituido por Dios, para nuestra purificación». Cúmpleme reconocer que es en esta última acepción, que la Iglesia lo considera.

Antes de Jesucristo existían sacramentos, y si bien éstos fueron reducidos por él, su institución anterior respondió a los objetos o fines que hoy se le atribuyen por la Iglesia; no ha cambiado, pues, su esencia.

Conviene que veamos lo que eran los sacramentos en tiempo de Moisés, porque este antecedente nos va a permitir apreciar en cuál de las acepciones indicadas debe tomarse el sacramento, tratándose del matrimonio.

Según el mismo Devoti, «los sacramentos de la ley de Moisés eran de varias especies: unos pertenecían a la consagración o institución del pueblo o de los ministros del culto de Dios, como la circuncisión y la consagración de los sacerdotes, otros eran concernientes al uso de las cosas sagradas, como la comida del cordero pascual en los ácidos, en lo relativo al pueblo, y de los panes en la proposición, la oblación de las víctimas, etcétera, y en especial el de la vaca bermeja y del macho de soltura. Tales sacramentos eran sólo necesarios a los hebreos, mas no a los demás hombres, los cuales muy bien «podían conseguir sin ellos su salvación», como observasen la ley natural, con alguna fe en el Mediador».

Se ve, pues, que antes como después de Jesucristo, el sacramento por su naturaleza y por sus fines, es puramente espiritual, y su institución no tiene otro objeto que el de la purificación del que lo recibe.

Pasemos ahora al contrato, o a lo que es éste respecto al sacramento, y así tendremos la cuestión claramente planteada, y veremos si la solución que sostenemos en el sentido de

la ley, ataca no ya a la religión, pero ni siquiera al culto.

En derecho, y según nuestro código, hay contrato, cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos.

Cuando la forma instrumental es requerida, dice el código, en el contrato, la validez de éste depende de la observancia de esa forma. Y debo llamar la atención del Senado sobre esto: que entre los contratos, para los cuales el código prescribe la forma de que deben estar revestidos los solemnes, se encuentran las estipulaciones matrimoniales, y ¿podrá prescindirse de esa forma, o dejarla librada a la conciencia de cada uno, tratándose del matrimonio mismo? No necesito repetir lo que ya tuve ocasión de decir y dije, sobre este punto.

Tenemos ya, lo que es sacramento y lo que es contrato: veamos lo que es matrimonio. Ocurramos a los mismos canonistas. Según Devoti, es «el contrato» por el cual el hombre y la mujer empeñan su fe recíprocamente, de vivir en sociedad marital y perpetua. Este contrato es materia de sacramento».

Tenemos, pues, a los canonistas definiendo el matrimonio «por el contrato» no por el sacramento.

El reputado juriseconsulto García Goyena, autor del Código Civil español, conocidamente católico, en los comentarios que encierran el origen, historia, motivos y espíritu de dicho código, interpretando, dice, la intención del Creador, define así al matrimonio: «Sociedad indivisible de varón y hembra, para haber hijos y educarlos y para ayudarse mutuamente en las vicisitudes de la vida». Nada hay en todo esto que se relacione con lo espiritual, y que pueda servir de base a la pretendida facultad que quiere atribuirse la autoridad eclesiástica para reglar este contrato en cuanto a su celebración, y decidir de su existencia.

Como se sabe, los sacramentos establecidos por Jesucristo y que son: el bautismo, la confirmación, la penitencia, la eucaristía, la extremaunción, el orden y el matrimonio, requieren la intervención de un ministro que los administre; pero como la Iglesia no ha podido desconocer, ni desconoce, la existencia legal de matrimonios en que no interviene sacerdote alguno o sólo tiene éste una intervención pasiva, ha surgido entre los canonistas la cuestión, largamente debatida, acerca de quiénes son los ministros del sacramento en el matrimonio, y han llegado a la conclusión de que lo son los mismos contrayentes.

Si los ministros en el matrimonio son los mismos contrayentes, el sacramento surge, nace del contrato mismo, para aquellos que pertenecen a la comunidad católica, y como acto de conciencia, dada su fe religiosa. Se desprende de todo esto que tratándose del matrimonio, el sacramento no puede ser tomado sino en la acepción de juramento, que según los canonistas, tiene lo que por otra parte se armoniza con la definición que los mismos dan del matrimonio, diciendo, como ya lo hemos visto, «que es un contrato» por el cual el hombre y la mujer «empeñan su fe», etcétera.

Pero se dice, la acepción en que la Iglesia emplea la palabra sacramento, es en la de gracia invisible, instituido por Dios, y siéndolo el matrimonio entre católicos, corresponde exclusivamente a la autoridad eclesiástica todo lo que se relacione con su celebración.

Pero yo me digo, señor presidente, si todos los objetos del matrimonio, según lo definen los mismos canonistas, son pura y esencialmente sociales, todo puede entrar en la celebración del matrimonio, menos el propósito de contraerlo para purificación de los que lo celebran: crear hijos, ayudarse recíprocamente en todos los actos de la vida, no son ciertamente fines espirituales.

Hay aun otra consideración que corrobora la opinión, de que en el matrimonio el sacramento debe tomarse en su aceptación de juramento, porque en la de gracia invisible para nuestra purificación hace surgir una anomalía, una contradicción. En efecto; todos los demás sacramentos: el bautismo, la confirmación, la penitencia, la eucaristía, la extremaunción, el orden, no sólo no se excluyen sino que por el contrario, algunos presuponen que se han recibido los otros en el orden en que están enumerados. No sucede así con el matrimonio, excluido por el orden, pues éste se encuentra entre los impedimentos establecidos por la Iglesia para el matrimonio.

Si en el matrimonio, el sacramento es gracia como en el orden, y no teniendo ella otro fin que el de la purificación, no pueden excluirse. Se dirá que el impedimento del orden ha sido establecido por razón de disciplina; pero esto no puede en ningún caso desnaturalizar el sacramento, restringirlo, mucho menos, desde que él ha sido establecido por Dios, a un solo y único fin.

He creído deber tocar la cuestión bajo esta fase, aunque muy ligeramente, lo que por otra parte basta a mi propósito para dejar establecido que la ley de matrimonio civil, que se

trata de dictar, no importa el desconocimiento ni mucho menos la usurpación de atribuciones propias de la autoridad espiritual, y que vamos a dictarla en ejercicio de facultades propias, inherentes a la soberanía, dejando a la Iglesia lo que es de la Iglesia.

Pienso que si estamos contestes en que el matrimonio es un contrato, elevado después a sacramento, sin perder por esto aquel carácter y siendo ajeno a la religión todo lo que es contrato, la divergencia que motiva el debate no puede nacer de una dificultad que no existe, para establecer la diferencia entre el contrato y el sacramento; forzoso será, entonces, convenir en que es otra la verdadera causa de esa divergencia, y no podemos encontrarla sino en la tendencia por parte de la autoridad eclesiástica, de conservar, alegando como propias, funciones que le fueron atribuidas por delegación de la autoridad civil o política en materia de matrimonio, aun como contrato.

Debemos plantear la cuestión y tratarla sin reservas. ¿Por qué no decirlo con franqueza? No se trata de sostener un sacramento, en que la ley no entra, en que no debe ni puede penetrar; de lo que se trata es de establecer si puede o no ser restringida por el poder espiritual, la facultad del civil para legislar sobre contratos, pues el matrimonio lo es según la Iglesia misma.

¿Se pone en duda la facultad de la Iglesia para dictar sus preceptos respecto al sacramento, preceptos que no pueden ir acompañados sino de sanciones espirituales? ¡No!; pero en cambio se pretende que se reconozca en las autoridades de la Iglesia la facultad de decidir de la celebración de un acto eminentemente civil y social y que como tal no puede estar subordinado a otras leyes que aquellas que determinan sus efectos y prestan su sanción a las obligaciones que de él nacen.

Reconocer en las autoridades de la Iglesia tal facultad, que es hasta ajena a sus fines y a su índole misma como institución, sería de parte del Congreso, como poder legislativo, una abdicación que no está facultado para hacer.

Colocada la cuestión en este terreno, que es, en nuestra opinión, en el que debe debatirse, veamos si la sanción de la ley invade una jurisdicción ajena cuando en nombre y en ejercicio de facultades propias y exclusivas del poder político, legislamos sobre el contrato de matrimonio.

Persistiendo en la actitud que me he impuesto, de no buscar en juriseconsultos o pensadores

poco afectos a la Iglesia opiniones o doctrinas que vengan en apoyo de las que sostenemos los que concurrimos a la sanción de la ley, voy a recurrir nuevamente a autoridades de la Iglesia y a la de autores notoriamente católicos.

Empezaré por el más notable, Santo Tomás, considerado como oráculo de la Iglesia y que tiene por consiguiente para ella una autoridad irrecusable.

Habla Santo Tomás: «Se dicen hábiles para el matrimonio las personas que reúnan las condiciones requeridas «por la ley que rija el matrimonio».

No dice, como se ve, por la ley de la Iglesia, sino por la «que rija» el matrimonio, lo que importa decir que está sometida a varias según el carácter en que se le tome. Pero, dejemos la palabra a Santo Tomás. Sigue éste, diciendo: «El matrimonio, en cuanto es oficio de la naturaleza, se rige por la ley natural; en cuanto es sacramento, se rige por la ley divina; y, en cuanto es oficio de la comunidad, «se rige por la ley civil».

La doctrina no puede ser más clara, más precisa; mantiene en toda su pureza las sabias doctrinas del maestro; pero, los que muestran un empeño persistente, en despojar al poder civil de una facultad tan trascendental, para atribuírsela a las autoridades de la Iglesia, no pueden negar el principio, y necesitan entonces desvirtuarlo con una interpretación, que tendrá mucho de ingeniosa, pero que no se puede sostener.

La interpretación que dan a aquella doctrina, que no la necesita, es: que cuando se dice que el matrimonio, como contrato, es regido por la ley civil, no se quiere decir esto, sino que el matrimonio está sometido a la ley civil, sólo en cuanto a sus efectos civiles, sin fijarse quizás, que Santo Tomás no habla de tales efectos sino del acto mismo, «como oficio» de la comunidad. Y no podía ser de otro modo; este notable Santo enseña lo que aprendió de su maestro: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, manteniendo la separación que éste estableció entre los dos reinos, cuando dijo que el suyo no era de esta vida.

Pero, no se lo toman todo; algo dejan, conceden que es la ley civil la que rige los efectos civiles del matrimonio, por consiguiente, que es ella la encargada de determinarlos; pero, esos efectos nacen de un acto, de un contrato, sin el que no pueden producirse. Luego ese acto, ese contrato no puede substraerse a la legislación que establece sus efectos.



Semejante interpretación está, por lo demás, desautorizada por el mismo Santo Tomás, de una manera evidente. El dice, como ya lo hemos visto, «que son hábiles para el matrimonio «las personas que reúnan las condiciones requeridas por la ley que rija el matrimonio». Y ha dicho también que el matrimonio «es regido por la ley civil», en cuanto es oficio de la comunidad, es decir, contrato. Ahora bien, si esta doctrina ha de entenderse, según la interpretación que pretende darle, esto es, si cuando Santo Tomás dice, que el matrimonio, como contrato u oficio de la comunidad, es regido por la ley civil, debe entenderse que se refiere sólo a los efectos civiles del matrimonio, ¿cómo explicarían esto, que también dice Santo Tomás: «Son hábiles para el matrimonio las personas que reúnan las condiciones requeridas por la ley que rija el matrimonio?» Y ya hemos visto que son tres las que lo rigen, incluso la civil.

Las condiciones requeridas para el matrimonio, ¿son acaso efectos del matrimonio? No puede, entonces, sostenerse una interpretación que nos conduciría a semejante absurdo.

La conclusión es, pues, lógica, inevitable. Si una persona, según lo enseña una autoridad tan respetable de la Iglesia, puede ser inhábil, por la ley civil, para contraer matrimonio, es evidente que es esa ley la que rige, la que gobierna el acto como contrato; no podría inhabilitar para celebrarlo, si no pudiera legislarlo.

Pero, no es esta sola la única autoridad que podemos invocar; hay otras, en cuya autorizada opinión podemos apoyarnos nuestras.

Elizondo, autor respetable y conocido, cuyas opiniones en materia de religión no pueden ser más definidas — baste a los señores senadores saber, que a la Inquisición, le llama el Santo Tribunal de la Inquisición —, tratando en su obra de las potestades de los príncipes temporales, dice: «Desde los tiempos miserables del gentilismo, fueron conocidos los impedimentos dirimentes e impidientes del matrimonio, así entre los cristianos como entre los infieles, cuidando, con la mayor exactitud las naciones, de circunscribir a aquél como contrato, ciertas leyes propias y de la esfera de éste, para que no se extravíe del fin ordenado por la misma naturaleza, de modo que no pudiendo dudarse se dirige el matrimonio como contrato, a un bien político, del cual depende en una parte muy superior o la tranquilidad o la turbación de los pueblos y de la familia, se vieron como en precisión los antiguos emperadores romanos,

de dictar leyes, relativas «a la edad, calidad y circunstancias» del matrimonio.»

Esta doctrina está de perfecto acuerdo con la de Santo Tomás, y destruye la interpretación recordada, a menos que se pretendiera que la edad, y demás calidades son efectos del matrimonio.

Sigue Elizondo: «Como bien político, se sujeta a las leyes civiles, sin que se oponga a este modo de pensar la reflexión de que el matrimonio es sacramento; pues, siendo su materia un contrato civil, pueden los príncipes, con justa causa, inhabilitar en ciertos casos y circunstancias a las personas que han de contraerlo.»

Se reconoce, pues, a la autoridad civil la facultad de establecer impedimentos dirimentes que, como se sabe, no sólo se oponen a la celebración del matrimonio, sino que invalidan el que se contrae, existiendo alguno de esos impedimentos; y supongo que los que pretenden que la ley civil, debe limitarse a los efectos civiles del matrimonio, no sostendrán que el impedimento que se opone a la celebración de aquél, y aun que lo anula, sea un efecto del matrimonio. Tenemos, entonces, que, reconocida la facultad de establecer impedimentos que obstan a la celebración del acto y van hasta anularlo, no puede sostenerse que esa facultad sólo empieza donde comienzan los efectos del acto que puede ser prohibido por la ley; por el contrario, si los efectos civiles del matrimonio sólo pueden ser regidos por la ley civil, es precisamente porque cae bajo el dominio exclusivo de ésta el acto que los produce.

Pero se dirá: es que la Iglesia puede también establecer impedimentos para el matrimonio, desde que reconoce en éste el carácter de sacramento que para ello tiene. Perfectamente; pero, no se desprende de aquí que el matrimonio esté sometido a su potestad, en cuanto a su celebración como contrato, ni puede reclamar la sanción de la ley civil para actos que sólo afectan la conciencia, y que como los sacramentos, por lo mismo que son espirituales, no pueden en ningún sentido ser materia de la ley civil.

Si reconociéramos en las autoridades de la Iglesia la facultad que ella pretende en esta materia, podría producirse una situación tal, cuya sola posibilidad basta para demostrar toda razón que creemos nos asiste, para sostener el pensamiento, la reforma que se trata de convertir en ley.

La Iglesia establece impedimentos para el matrimonio, fundándose en que para ella es

un sacramento. Pongámonos en el caso de que la autoridad civil lo hace también en virtud de una facultad que la Iglesia no le desconoce, por ser el matrimonio un contrato civil. Supongamos que la autoridad civil establece un impedimento que no lo es tal para la Iglesia; ¿autorizaría ésta el matrimonio? Si no lo hace, subordinaría la administración del sacramento a la ley civil; si lo hace, ese matrimonio no sería tal para la ley; lo que importa decir que esto decide de la existencia del acto mismo, y es precisamente por eso que no le reconoce efecto alguno.

Me propongo ser lo más breve posible; pero no puedo prescindir, en cuestión tan grave, de citar opiniones autorizadas y pido al Senado me disculpe si ocupo un momento más su atención.

El mismo Elizondo, ya citado, sosteniendo la facultad de los príncipes en esta materia, dice: «Aunque por la ley evangélica se elevó el matrimonio a sacramento «fué sin mutación, variación o alteración alguna» en la naturaleza «precedente de contrato». Y no podía ser de otra manera, dada la misión de la Iglesia, que es de enseñanza, dado su objeto como institución.

El contrato, aunque elevado a sacramento, quedó, pues, siempre contrato, y no dejó de serlo; quedó sometido en este carácter a las leyes, a que él obedecía; y fué sólo por disposiciones expresas de éstas, que las autoridades de la Iglesia tomaron en él la intervención, que hoy quieren conservar, pero ya como facultad inherente a la potestad espiritual.

El Código español, comentado por el jurisculto García Goyena, a quien cité antes, establece, en el artículo 48, que el matrimonio ha de celebrarse según disponen los cánones de la Iglesia católica, admitidos en España. Goyena, después de referirse, dice: «El matrimonio, por su origen, es un contrato; entre los cristianos es también sacramento; como contrato civil, ha precedido a la institución de todos los sacramentos y al establecimiento de todas las religiones positivas; su fecha es tan antigua como el hombre.

«Como contrato, es de la exclusiva competencia de la autoridad temporal que puede establecer impedimentos aun dirimentes y dispensarlos. Así lo vemos practicado por los emperadores romanos y otros príncipes cristianos». . . Sigue luego haciendo la historia de la legislación en esta materia, y agrega: «Andando el tiempo y transcurridos siglos, el sacramento se reputó lo principal y el contrato lo accesorio; el primero absolvió al segundo, todo

pasó a la autoridad eclesiástica «por delegación expresa o tácita de los reyes»; pero, como los derechos de la soberanía son inalienables e imprescriptibles, pueden los reyes de España hacer hoy lo que sus antecesores hicieron en otro tiempo, separando el contrato del sacramento». Por consiguiente, no podrá argüirse con este artículo, para menguar en lo sucesivo aquellos derechos soberanos».

Así comenta el jurisculto Goyena la disposición del Código Civil de España, y de que es autor, disposición análoga a la de nuestro código, que también dispone, que el matrimonio entre católicos, debe ser celebrado ante la Iglesia católica, y con arreglo a los cánones.

La opinión de este codificador, cuya autoridad no puede ponerse en duda, y cuyas creencias no lo colocan entre los que pudieran ser sospechados de parcialidad contra las autoridades de la Iglesia, separa también el contrato del sacramento, sosteniendo con tal claridad, que no deja lugar a la más leve duda, la facultad indiscutible de la potestad civil para legislar el matrimonio como contrato, reasumiendo las atribuciones que delegó en la autoridad eclesiástica.

Goyena sostiene como ha podido verse, que la facultad del poder civil para legislar sobre el matrimonio, es inherente a la soberanía, y que la disposición de la ley civil, que somete el matrimonio a los cánones en cuanto a su celebración, no es sino una delegación, que no amengua la soberanía, pudiendo el soberano que hizo la delegación, retirarla separando el contrato del sacramento.

Prescindiendo de la fase constitucional de la cuestión, bajo la cual ha sido tratada por los que impugnan la reforma. Podría citar prescripciones de la Constitución para demostrar que el Congreso no sólo puede sino que debe dictar la ley que nos ocupa, prescripciones que no han sido recordadas en el debate; pero me extendería demasiado, y, por otra parte, la cuestión ha sido dilucidada en este terreno, contestando a las objeciones hechas, el miembro informante de la mayoría de la Comisión de Legislación, con razonamientos a mi juicio concluyentes.

Uno de los ilustrados oradores que combaten el pensamiento que envuelve el proyecto, mi honorable colega el senador por Santa Fe, defendiendo sus doctrinas, con la competencia y educación que le distinguen, invocaba en apoyo de ellas la autoridad incontestable de Dios, rodeando del prestigio de ésta la de sus representantes en el ejercicio del poder espiritual; pero el mismo señor senador nos decía también, que él no concibe gobierno o autoridad, que

no emané de Dios, incluso, la civil o política, y comprendiendo la necesidad de demostrar, para mantenerse en su posición, que la facultad privativa que él atribuye a la Iglesia, no amengua la soberanía del Estado, y no pudiendo desconocer, que la soberanía es una, buscaba una solución a la dificultad con que tropezaba, y nos decía: «La soberanía es una; pero se bifurca; en lo espiritual es soberana la Iglesia; en lo temporal, lo es el poder civil.»

Aceptemos la doctrina, y tomémosla como base para buscar la solución de la cuestión que debatimos.

Si las dos potestades son soberanas, no puede una de ellas pretender ser el árbitro de las facultades o atribuciones propias de la otra, de tal manera, que esta deba acatar como incontrovertibles las decisiones de aquélla, pues, dejaría de ser soberano, y en la cuestión que nos ocupa, semejante pretensión, por parte de la autoridad eclesiástica, es tanto más insostenible, cuanto que, la civil o política, al legislar sobre el matrimonio, toma a éste en su carácter de contrato, que le reconoce la Iglesia, sin entrar en los dominios espirituales de ésta, y haciendo por el contrario completa, absoluta prescindencia del sacramento, precisamente porque reconoce que este es del resorte exclusivo de la Iglesia.

Pero si seguimos considerando la cuestión dentro de la doctrina del señor senador, llegamos también a esta otra conclusión: si no se concibe autoridad alguna, que no emané de Dios, y se reconoce la existencia legal de la civil o política, resulta, que no hay razón para que las de la Iglesia pretendan primacía sobre aquélla, desde que tienen el mismo origen y son igualmente soberanas.

Esta no es, como se ha dicho, una ley de coacción, que no consulta la opinión, que va contra las costumbres, contra las creencias; por nuestra parte creemos consultar la opinión y a juzgar por los órganos de que dispone para manifestarse, parece que no la hemos interpretado mal.

En cuanto a las costumbres, si ellas no fueran susceptibles de modificaciones no nos encontraríamos en el estado de civilización a que hemos llegado, y que seguramente no habríamos alcanzado, sin el mejoramiento sensible que en ellas se ha operado.

Las leyes influyen poderosamente sobre las costumbres, su bondad y previsión consiste en encaminarlas, y a nuestros progresos en materia de legislación, debemos en gran parte nuestro mejoramiento social.

Tampoco es exacto que la ley que proyecta-

mos, va contra las creencias; si se trata de las religiosas, que son en las que se inspira la objeción, no las atacamos ni les imponemos restricciones, por el contrario, prescindimos de ellas por completo, porque los preceptos destinados a encaminarlas, no son del resorte del poder civil, y escapan a toda acción de la ley.

Se ha llamado ley de coacción a la que nos proponemos dictar, y se la resiste por esta aparente objeción; pero, bueno es recordar que este es el carácter de toda ley, y es por eso que la Iglesia adoptó la palabra «canon» porque quiso, según el canonista Devoti, «abstenerse de emplear el nombre imperioso de ley que parece encerrar en sí, violencia y coacción.»

Esta ley que pasará a formar parte de nuestro Código Civil, no tiene carácter distinto de éste, y si implica coacción, violencia, ¿por qué se empeñan en mantener la disposición actual del código, que manda que el matrimonio se celebre ante la Iglesia católica?

Si la Iglesia para caracterizar mejor sus preceptos y alejar hasta la sospecha de violencia o coacción, se abstiene de emplear la palabra ley, ¿por qué se nos exige que mantengamos leyes que obligan a los católicos a casarse con arreglo a los cánones, sólo porque la Iglesia eleva esa unión a sacramento, lo que importa pretender, que se les compela al cumplimiento de los deberes que les impone su fe? (*¡Muy bien!*).

Nos decía mi ilustrado colega el señor senador por Córdoba, «que no comprendía nuestras doctrinas liberales; que él no entendía así la libertad; que ésta debe ser igual para todos, pero que la ley propuesta coarta a los católicos; que ellos no quieren esa libertad que se les ofrece, que les basta con la que tienen, que se encuentran satisfechos y que los dejemos así». No estoy seguro si son estas sus palabras, pero creo que expresan su pensamiento.

El que tal oyera, sin conocer la ley que se proyecta, creería seguramente, que ésta contiene alguna disposición, que prohíba a los católicos cumplir, por lo que hace a su matrimonio, con los preceptos de la Iglesia; pero la ley no tiene semejante disposición, y cuando se ha dicho que es una ley de libertad, sólo se ha querido significar, que ella reconoce la que tiene cada uno para seguir los dictados de su conciencia, respecto a sus deberes religiosos, sin hacer depender del cumplimiento de éstos los efectos de su matrimonio como contrato, único de que puede y debe preocuparse la ley.

Si no fuera por no molestar más la atención del Senado, me ocuparía de demostrar, cómo

con nuestra legislación actual, el católico puede casarse válidamente para la ley, sin necesidad de hacerlo ante los ministros de su culto, y que por consiguiente, la reforma no modifica nada al respecto; no hace sino establecer la forma en que debe celebrarse el contrato de matrimonio, y prescinde de lo que éste pueda tener de religioso, según las creencias de cada uno. Si en la discusión en particular, la minoría de la Comisión de Legislación, sostiene su despacho, tendré oportunidad de ocuparme de este punto.

He molestado ya demasiado la atención del Senado, y si no me he limitado a llenar la tarea que me confiaron mis honorables colegas, de dar al Senado una ligera idea de las modificaciones que proponemos, es porque creía necesario, dada la trascendencia de la cuestión, ocuparme, aunque brevemente, de los fundamentos en que se apoyan las opiniones que sostenemos, y los principios fundamentales a que responden las modificaciones que dejamos libradas al ilustrado juicio del Senado.

No terminaré sin embargo, sin manifestar, que no participo de las inquietudes que el señor senador por Santa Fe dice le agitan, porque cree ver en el triunfo de la reforma que se debate, la derrota de la libertad y de las instituciones: por el contrario, concurre con la conciencia tranquila a la sanción de esta ley, con la profunda convicción, de que ella no estorba el ejercicio de ninguna libertad, y que reasumiendo atribuciones o funciones que había delegado el poder político, mantiene en toda su plenitud la soberanía del Estado, lo que, lejos de ser una derrota, importa una victoria para nuestras instituciones, bastante a caracterizar una época y que será seguramente saludada con aplauso, por los hombres de todas las creencias, que no miren con indiferencia la suerte de nuestro país. (*Aplausos*).

**Sr. del Valle.** — No necesito hacer valer ante la Cámara, ni ante el país, las razones premiosas que me obligan a tomar parte en este debate y dar a la exposición de mis ideas, una forma quizás más extensa de la que pudiera requerir el estado de la discusión, sino en cuanto debo explicar por qué he esperado hasta este instante para hacer uso de la palabra, en una cuestión de tanto momento para la República.

Los partidarios y sostenedores de la reforma de nuestra legislación en la parte relativa al matrimonio, nos encontrábamos en una situación difícil, cuando comenzó la discusión del proyecto iniciado por el Poder Ejecutivo.

Habíamos dedicado a este grave asunto, toda la atención que reclama y nos habíamos dado

cuenta de que, si bien es cierto que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, respondía en su intención, a una necesidad de nuestro progreso y de nuestra civilización, había sido preparado sin el estudio suficiente para resolver las delicadas cuestiones que deben surgir bajo su imperio.

El Senado habrá notado por la clarísima exposición del señor senador por Corrientes, hasta dónde van las reformas de fondo y de forma que hemos proyectado en esta ley, y comprenderá que, si hubiéramos entrado en el debate, cuando la cuestión estaba sometida a discusión general, nos habríamos visto obligados a sostener el pensamiento inicial de la ley, y combatir el proyecto mismo presentado por el Poder Ejecutivo.

Hay formas parlamentarias para salvar estas dificultades. El reglamento nos habilitaba para presentar, durante la discusión en general, el proyecto que hemos sometido a la consideración de la Cámara, a fin de que fuera considerado en el caso de ser rechazado el iniciado por el Poder Ejecutivo. Pero este procedimiento ofrecía inconvenientes de orden diverso y sobre todo, de táctica parlamentaria. Quién sabe si producida esa situación, no se anarquizaran las ideas, y concurriendo con la otra fracción de la Cámara a la derrota del proyecto del Poder Ejecutivo, nos encontrábamos, en seguida, impotentes para hacer prevalecer el nuestro.

El número de votos que los opositores a esta ley han reunido y que podíamos suponer mayor, basta para justificar el temor que nos ha detenido ante el peligro posible, de perder la idea, en general, por observarla antes de que hubiera sido votada y aceptada por la Cámara y que quedara solamente sujeta a las enmiendas de la deliberación en particular.

No podíamos, pues, crear esta situación, con todos sus inconvenientes, y teníamos que buscar otra en que nos fuera lícito decir todo lo que hubiéramos deseado manifestar en aquella ocasión, y fundar con toda la extensión que la naturaleza del asunto exige, las opiniones que nos han inducido y que nos inducen a mantener la reforma de que se trata.

Interesa al país, interesa al Senado, interesa al decoro de cada uno de los senadores que toman parte en este debate, dejar establecido, en una forma clara y suficientemente visible, los motivos de su actitud; y si esta es la regla general para todos mis honorables colegas, reviste caracteres de urgencia especial para el que habla en este momento.

Colocado, por mi oposición política, tan lejos del Poder Ejecutivo que ha iniciado este proyecto, levantada la oposición a su iniciativa, por un senador que ocupa en el seno de la Cámara la misma posición política que yo ocupo, necesito explicar porque, yo senador de la oposición, he concurrido a la sanción del proyecto del Poder Ejecutivo, y dejar establecido que obedezco a convicciones serias y arraigadas, que felizmente nada tienen que ver con la política.

La gravedad de este asunto está demostrada por el largo debate que ya ha tenido lugar, y si algo más fuera necesario para demostrarla, daría de ello testimonio suficiente, la circunstancia que antes he mencionado.

Por primera vez, después de siete años, se salvan o se separan las barreras que la política había establecido en el Senado, y, por primera vez también, senadores ministeriales, ponen todo el caudal de su ingenio y de su elocuencia, a contribución, para combatir actos e iniciativas del Poder Ejecutivo, y miembros de la oposición, declaran que traen a favor de aquella iniciativa, todo el concurso de que son capaces en cualquier momento para hacer triunfar sus propias ideas.

La verdad es, señor presidente, que una cuestión de este género, tratada en general, o tratada en Comisión como lo tratamos en este momento, en que nos es lícito tocar todos los puntos de la ley, las diversas fases, bajo las cuales ha sido considerada en debates anteriores, no puede dejar de tener las proyecciones que ha alcanzado en la discusión en general, y que mantiene hasta este momento en la discusión en particular. No es posible tocar asunto tan trascendente, sin que inmediatamente surja la lucha entre las dos escuelas opuestas: entre la escuela que el señor senador por Santa Fe llamada espiritualista, cristiana y católica, y que sus opositores llaman teológica, y la escuela liberal positivista, que estaba representada por los sostenedores del proyecto.

Y a este propósito, yo que he escuchado con la más profunda atención el extenso e interesante debate, haré notar que las ideas tienen siempre su representación y su forma lógicas.

La escuela espiritual, cristiana, católica y teológica, ha estado dignamente representada. El Senado ha escuchado durante dos o tres sesiones, la palabra abundante y elocuentísima del señor senador por Santa Fe, y ha podido observar cómo es exacta aquella observación del historiador de la civilización de Inglaterra, cómo es peculiar de esta escuela, el método

deductivo que, partiendo de los principios generales, baja a los hechos tratando de acomodarlos y de que se ajusten al principio preestablecido, apartándolos como si no existieran, cuando no se ajustan a la doctrina, y salvando siempre de la controversia la idea primera que sirvió de punto de partida a su demostración.

Por el contrario, la escuela positivista y liberal, podemos decir, también tenía su representación en el señor ministro del interior, que procedía en orden inverso, y aplicando el método inductivo, reunía hechos, los analizaba, los comparaba, los acumulaba, e iba deduciendo principios por el sistema experimental y demostrativo.

Las conclusiones a que estas dos escuelas tan opuestas llegan, son naturalmente las que se han presentado en el Senado por uno y otro orador.

El señor senador por Santa Fe partía de la palabra revelada, de la divinidad de Cristo, de la infalibilidad de la Iglesia, y no se separaba un ápice de la lógica, cuando llegaba a las conclusiones que todos hemos escuchado. El señor ministro del interior, aplicando el método inductivo, concretándose a los hechos que se pueden demostrar y a su análisis, inducía de ellos las verdades que acreditan y llegaba, también lógicamente, a negar todo lo que no es susceptible de demostración científica.

En realidad, la verdad puede servirse de los dos sistemas y comprobarse por los dos métodos. El inductivo nos servirá para llegar demostrativamente a la fijación de los principios; el deductivo para comprobar la exactitud del principio establecido y para facilitar las investigaciones futuras del pensamiento humano por el raciocinio, que descansa en principios de un orden general ya demostrado.

Yo no voy a profundizar, ni mucho menos, todas las cuestiones que han sido tocadas en este debate; pero, sí, voy a aprovechar cuanto se ha dicho en él y que considero pertinente a mi objeto, para poner de manifiesto, ante la Cámara, cuáles son las conclusiones y las resultantes a que se llega, con los diversos elementos que suministra la discusión, pesando la afirmación, dogmática por su naturaleza, de la escuela católica, y tomando en cuenta la crítica y la duda que le opone la escuela positivista, representada por el señor ministro del interior. La historia del matrimonio se ha hecho extensamente por todos los oradores que se han ocupado de este asunto, y cada uno con propósitos distintos, ha traído la luz que necesitamos para llegar a conclusiones claras y concretas.

Había una proposición, establecida por los opositores a la ley, en cuyo apoyo se ha buscado

la palabra de la historia, y era esta: el matrimonio ha tenido siempre formas religiosas; ese es su origen, y no debemos desnaturalizarlo, porque amenazaríamos el orden social y lanzaríamos a la República en caminos de aventuras.

Para contestar esta afirmación capital del debate, los señores ministros del interior y de culto e instrucción pública han traído buenos antecedentes, pero me parece que han olvidado algo esencial y será lo único que voy a mencionar, con relación a la historia antigua, a la que tanta importancia se le ha dado en el debate.

Es muy curioso que, estudiando la institución del matrimonio, desde su origen, y habiendo servido de tema fundamental al debate, los libros sagrados, se haya omitido hablar de las dos únicas ceremonias de matrimonio que figuran en el *Viejo Testamento*.

En el *Viejo Testamento* se habla de muchos matrimonios; pero sólo hay dos ceremonias descritas: una en el libro de Ruth y otra en el libro de Tobías.

Bueno es tener presente que el libro de Ruth es el aceptado por todos los cristianos, mientras que el libro de Tobías figura entre los que califican de apócrifos los protestantes, y sólo es aceptado por los católicos.

Bien, señor presidente; en el libro de Ruth el matrimonio se celebra sin la mínima intervención sacerdotal, y no solamente sin intervención sacerdotal, sino también, sin la menor invocación de la divinidad. En el libro de Tobías el matrimonio se celebra con invocación a la divinidad, pero sin la menor intervención sacerdotal.

Este hecho tiene una importancia capital para los objetos del debate, porque sirve, como primer jalón, para llegar al término que me propongo.

El pueblo judío era un pueblo esencialmente religioso. Con justicia ha podido hacerse su elogio, hoy, que las ideas de intolerancia cristiana van desapareciendo en el mundo.

Disraeli, el famoso canciller de Inglaterra, defendiendo su raza, ha dicho con razón: «La humanidad tendrá siempre que inclinarse con respeto ante este pueblo, de donde ha salido el primer legislador conocido: Moisés; el primer administrador: Salomón; el primer reformador, y revolucionario: Jesús!»

Y si aquella consideración no bastara para dar a su legislación la importancia merecida, todavía habría que recordar que, de un matrimonio, celebrado con arreglo y sujeción a la ley hebrea, salió el fundador de la religión cristiana, y que, por consecuencia, los cristia-

nos no pueden repudiar su moralidad intrínseca por razón de sus formas.

El matrimonio de los hebreos no da, entonces, como primera resultante, la siguiente: que es posible que el matrimonio llene sus fines morales y sociales, que los ha llenado en la historia de la humanidad, sin formas sacerdotales, y aun sin que se haya invocado, en el acto, a la divinidad.

No quiero detenerme a comprobar con lecturas, que serían fuera de lugar, la afirmación categórica que hago, respecto al carácter del matrimonio de los hebreos, porque me parece que este punto no puede ni siquiera ser discutido.

Pero me digo lo siguiente: el cristianismo ha introducido el sacramento. Pero, el sacramento del matrimonio, como lo hace notar el mismo señor senador por Santa Fe, no es tal sacramento para todos los cristianos. Sobre cuatrocientos millones de cristianos que existen en el universo sólo hay doscientos millones de católicos y ochenta millones de orientales que le atribuyen ese carácter y ciento y tantos millones de cristianos protestantes que se lo niegan.

Fuera de esto, hay mil millones de hombres que tampoco creen que el matrimonio sea un sacramento.

Entonces, pues, podemos decir que no es siquiera condición de la civilización cristiana el matrimonio sacramental, porque sería petulancia e infundada vanagloria de nuestra parte creer o pretender que sólo los católicos representan aquella civilización, cuando entre los protestantes se encuentran naciones como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, que participan de la más alta moralidad y civilización conocida hasta nuestros tiempos.

Este es, pues, el segundo jalón que dejamos establecido.

En el primero hemos dicho que el hombre ha podido llenar sus fines naturales y sociales sin intervenir sacerdotes en el matrimonio. En el segundo hacemos constar que, sin el carácter sacramental del matrimonio, la civilización pudo llegar a sus más altas cumbres.

El señor ministro de culto, en uno de sus discursos hizo alusión a la Inquisición provocando una réplica ardiente y vivaz del señor senador por Santa Fe, quien mostró que todos los crímenes cometidos por la Inquisición, en España, habían sido repetidos análogamente por los protestantes en Inglaterra. Y la verdad es, señor presidente, que al señor senador le sobraba razón, sin que dejara de tenerla el señor ministro de culto; basta recordar que

todas las leyes que los católicos habían dictado contra los infieles fueron aplicadas en Inglaterra por los protestantes, contra los católicos.

Se ha conservado entre las curiosidades de Disraeli, el padre o tío del ministro de Inglaterra, el recuerdo de una anécdota histórica que ilustra el caso.

Cuando se enjuiciaba en Inglaterra a Guillermo Penn, el fundador de Pensilvania, por motivos religiosos, — era cuáquero — se tropezó con dificultades para condenarlo porque era un hombre justo, hasta que, por último, a fuerza de intimidaciones, el *coroner* de la ciudad de Londres consiguió hacerlo sentenciar por el jurado. Obtenido su inico triunfo, el *coroner*, que también era hombre de buena fe, decía: «Ahora me doy cuenta del objeto y la sabiduría de la Inquisición española; nosotros no andaremos bien, hasta que no tengamos una institución análoga».

La Inquisición española ha tenido su imitación en las persecuciones protestantes; pero de este hecho, que se presenta uniformemente en todos los países con religión oficial, ¿qué se deduce? La única consecuencia que el sociólogo puede sacar, es que, donde quiera que se establece el consorcio entre la Iglesia y el Estado y en que la religión inviste y adquiere el carácter oficial, inmediatamente se hace despotica y tiránica.

El señor senador por Santa Fe decía: «La explicación de las autoridades de la Inquisición o del protestantismo tiene que buscarse en la obscuridad de los tiempos.»

Y en efecto, señor presidente, los tiempos concurren a explicar en parte aquellos sucesos, pero no totalmente.

La intolerancia ha resistido al transcurso de los siglos. Yo recuerdo que a principios del siglo pasado, en Inglaterra, el ministro Walpole, puso un impuesto penal contra los católicos, a consecuencia de una conspiración jacobina.

Recuerdo también que en 1779, es decir, a fines del siglo pasado, recién se abolieron las leyes inglesas que aplicaban doble impuesto, entre otras iniquidades, a los súbditos católicos, por ser católicos; y en el curso de este debate, se ha de ver, que aquel espíritu de intolerancia, subsiste hasta el día actual, en medio de la libertad de que goza aquella gran nación.

Pero esto tampoco era, ni es peculiar de las iglesias protestantes.

En aquella misma época, en 1775, en Francia, bajo la acción y la influencia directa de la pro-

paganda liberal de los inciclopedistas, en presencia de Voltaire que aun vivía, Luis XVI fué llamado a jurar, y un hombre de gobierno, Turgot, le pidió que eliminara de su juramento, en el acto de la consagración, la parte en que se obligaba a exterminar a los infieles. Luis XVI era un hombre discreto y era un buen rey. Vaciló, lo consultó con su ministro, señor Maurepas, y este le contestó: «El señor de Turgot, tiene la más completa razón; pero los fanáticos son más temibles que los heréticos; y Luis XVI juró.

Esto pasaba en 1775, es decir, un año antes de proclamarse la independencia en Estados de Norte América, un año antes de hacerse aquellas grandes declaraciones que han cambiado la fase del derecho público y las nociones de la libertad humana.

No son, pues, los tiempos, explicación suficiente de aquellos fenómenos, y se ve que los siglos transcurren y la intolerancia persiste.

Más historia todavía. Yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo las *Memorias* de Roberto Peel, el grave y sincero estadista de Inglaterra, conservo el recuerdo, de la profunda tristeza y sentida emoción, con que cuenta cómo perdió su asiento en el Parlamento de Inglaterra, como representante de la Universidad de Oxford, por haber concurrido a la sanción del acta de emancipación de los católicos, en 1829.

Hasta entonces la intolerancia religiosa subsistía; el católico no podía sentarse en el Parlamento inglés. Entraron los católicos, y hasta 1858, no pudieron entrar los judíos: fué necesario un Roschild para forzar la mano a la intolerancia religiosa. Pueden ahora entrar los judíos, los que tienen que ser representantes necesarios de una de las partes más pobladas del imperio británico.

Llegará también el momento de esta reforma; pero entretanto, vemos cómo se mantiene y cómo persiste a través de la civilización y de los tiempos, la intolerancia religiosa.

Mi tercera resultante, pues, el tercer jalón que pongo en mi camino es este: «La historia demuestra — la historia invocada por los católicos y por los libres pensadores — que, donde quiera que se ha unido la Iglesia con el Estado, ha germinado la intransigencia religiosa» y de la intransigencia religiosa al despotismo político, no hay gran distancia, como más adelante lo hemos de ver.

En nuestros propios días, los carlistas en España, los legitimistas en Francia, nos suministran elementos de juicio, suficientes, para mostrar cómo se han unido en el pasado, y cómo

es difícil concebir lo uno sin lo otro: la Iglesia y el poder absoluto, están vinculados e igualmente representados por esos dos partidos, de reacción extrema, que anhelan apoderarse del gobierno, para cambiar las corrientes de la opinión de su siglo y de su época y que, por lo mismo, son impotentes.

El señor ministro del interior se detenía en esta misma fase de la cuestión; pero llegaba a una conclusión, que por mi parte, no admito.

El dijo con mucha elocuencia y con un movimiento verdaderamente oratorio: «La lucha de la Iglesia con el Estado produjo las guerras, el atraso, la sangre; pero, ¡raro resultado de las leyes eternas! de aquellas luchas brotó la libertad humana!» En mejores términos, tal fué su pensamiento.

Quizás el señor ministro del interior no se dió cuenta de que su síntesis histórica llevaba en las entrañas el error, y un error que los hombres de su escuela no deben establecer, ni dejar establecido por otros.

Si de aquellos antecedentes resultaran tales consecuencias, ¿adónde iríamos a parar? A la bendición de aquellas guerras; a la bendición de aquella unión transitoria, a reconocerlas como generadoras de la libertad humana.

¡No, absolutamente, no!

La unión de la Iglesia y el Estado, lo que ha hecho, ha sido retardar las conquistas de la libertad, retardar el progreso de la humanidad misma.

Nada tenemos que agradecer ni a las luchas que ensangrentaron el suelo de Europa, en diversos siglos y diversas zonas, ni a la concordia interesada a que arribaron en diversas épocas, para responder a intereses del momento.

Las libertades públicas nada ganaron, las creencias religiosas perdieron mucho.

Bajo el imperio de la iglesia oficial, las creencias se hicieron intransigentes; y con el apoyo de la Iglesia, el poder civil constituyó ese absurdo para la filosofía moderna, que se llama el derecho divino de los reyes.

En uno y en otro caso, se llegaba necesaria, infaliblemente, al abuso del poder y a la opresión de los pueblos.

Considero, pues, que en buena doctrina y en buena lógica, no podemos, por nuestra parte, dejar de establecer como verdad, que lo que ha retardado hasta este momento el adelanto de las ideas, del progreso y de la libertad humana, ha sido precisamente lo que el señor ministro del interior señalaba como causa u origen de la libertad y del progreso.

Pero debo agregar, que, precisamente, la tendencia del espíritu moderno, responde a la teoría,

que por mi parte sostengo: todo el movimiento del espíritu humano en esta época, tiende a la separación de la Iglesia y del Estado, a la separación de lo espiritual de lo temporal, como lo dijo con exactitud el señor senador por Corrientes.

Estas doctrinas, estos principios sociales, tienen antecedentes que los cristianos no pueden repudiar; que los hombres libres reivindicán con derecho: esta es la doctrina bajo la cual se han constituido los pueblos más libres de la tierra.

Los Estados Unidos de América han consagrado en su Constitución nacional y en la constitución de todos sus estados, la independencia de lo espiritual y de lo temporal; la separación de la Iglesia y del Estado; llegando hasta consignar el principio, que dentro de algún tiempo se ha de consignar en la Constitución de la República Argentina, de que nadie puede ser obligado, siquiera sea a costear un culto a que pertenece.

¿Se es el mismo principio que ha aceptado al constituirse, la Italia moderna, siguiendo la inspiración de Cavour, quien si no tuviera la gloria imperecedera de haber echado las bases de la unificación de su patria, tendría, por lo menos, la honra de haber encontrado una fórmula, simple y clara, para transmitir a la humanidad entera, la idea de gobierno, que los americanos habían iniciado en el mundo.

Ya, en otra ocasión, he tenido oportunidad de manifestar que ese es el propósito que persigo en mi vida política, en asuntos de esta naturaleza; y dados mis antecedentes, no necesito decir que, no es un espíritu de impiedad el que me guía, sino el convencimiento profundo de que, en la separación de estas dos entidades, se encontrarán mayores garantías para las libertades civiles y mayor pureza en las costumbres y enseñanzas de la Iglesia.

Si necesitara comprobar esta opinión en nuestros propios días y en este mismo momento, me bastaría hacer valer ante los espíritus tímidos, la elocuente pintura que hacía el señor senador por Santa Fe, cuando nos mostraba al Pontífice de Roma, en el momento actual, decidiendo de la paz de las naciones, al resolver la cuestión de las Carolinas; obligando al emperador de Alemania a modificar las «Leyes de Mayo»; influyendo con el zar de Rusia en la legislación de Polonia; en una palabra, ejercitando una acción política, como difícilmente podría alcanzarla ningún otro poder de la tierra, exclusivamente por su autoridad moral, y cuando no tiene ni ejercita un solo átomo de fuerza ni de autoridad temporal. Y si esto



sucede en dominios extraños a la Iglesia, ¿cuál no sería su autoridad y su fuerza dentro de la órbita que le es propia y cuando no saliera de las regiones de lo espiritual? La religión nada perdería con su separación del poder civil, y la sociedad ganaría un mejor gobierno, no teniendo que preocuparse, como periódicamente tiene que hacerlo, de todas estas cuestiones, que perturban la tranquilidad de la marcha social, o sacan de su cauce la fuerza política.

Y bien, señor presidente: la tendencia del proyecto que discutimos, es esa, y he ahí por qué yo le presto mi voto y traigo a este debate mi palabra convencida, sin preocuparme absolutamente de si el gobierno, a quien combato, inicia esta idea o si le habría convenido a la oposición, a que pertenezco, convertirla en arma de guerra.

Es tan grande, tan trascendente, para los destinos futuros del país, la resolución de este grave asunto, que se borra y se desvanece ante él toda consideración de política transitoria.

Pero, señor presidente, he notado con sorpresa que los antecedentes históricos que se han invocado en este debate, con relación a la ley de matrimonio civil, se han detenido en la edad media. ¿Es que la historia no tiene enseñanzas posteriores? ¿Es que debemos buscar inspiración, como legisladores, en los concilios del siglo XVI, o en la organización social de los pueblos del siglo XVII? ¿O debemos, por el contrario, ocurrir a nuestro siglo y a nuestra época? ¿Podemos prescindir de la evolución operada en las ideas, en la legislación y en todo orden del pensamiento humano, por aquel grande acontecimiento que marca una época en la historia, y que se llama la Revolución Francesa?

En mi concepto, absolutamente no.

Y ya que toco este punto, voy a desvirtuar una aseveración hecha en el debate.

La ley de matrimonio civil, no tiene por autor a Napoleón I, como lo afirmó el señor senador por Santa Fe, en defensa de su tesis, induciendo al señor ministro de culto, a que bajo una mala inspiración, pronunciara palabras de elogio hacia esta siniestra grandeza, para defender su proyecto. Napoleón no ha sido el iniciador de esta ley, ni mucho menos. Los déspotas son capaces de tener inspiraciones que cimenten la disciplina de las naciones, porque la disciplina aumenta la fuerza; pueden llegar a restablecer el orden social, en un momento histórico dado; pero nunca, jamás, han concebido, ni iniciado, instituciones destinadas a salvaguardar la dignidad y libertad

humanas. No estaba eso en la naturaleza ni en los medios de Napoleón, ni de Felipe II.

Datos históricos incontrovertibles bastarán para demostrarlo.

El primer edicto, dictado en Francia, relativo al matrimonio civil, lleva la fecha de 1787, y fué publicado bajo la influencia de Turgot, de Malesherbes, y de Necker, por Luis XVI, a objeto de facilitar y regularizar la unión de los protestantes.

Pero, donde se consagra el precepto general, que rige hasta el día de hoy el matrimonio en la legislación francesa y que se va extendiendo por el mundo entero, fué en la Constitución de 1791 y en la ley de 20 Septiembre de 1792.

La iniciativa, pues, de esta idea pertenece a los constituyentes de Francia, a los revolucionarios de 1789, a la grande y buena época de Francia, a los revolucionarios que hicieron el grandioso movimiento en favor de la libertad y que no se mancharon con los crímenes del terror. Los republicanos del mundo entero, podemos honrarnos con el origen de esta ley y reivindicarla como gloria propia para nuestra causa: no es la obra de los déspotas, ni de los demagogos! (*Aplausos*).

Voy a permitirme leer el artículo de la Constitución de 1791, porque puede consignarse hoy día en el código más adelantado de la tierra. Dice el artículo 7º del título II, de la primera Constitución dada a Francia en Septiembre de 1791: «La ley no considera el matrimonio sino como un contrato civil. El poder legislativo establecerá para todos los habitantes, sin distinción, el modo cómo se hará constar los matrimonios, nacimientos y defunciones y designará los oficiales públicos que recibirán y conservarán las actas.»

En conformidad a esta disposición constitucional, se dictó la ley de 20 de Septiembre de 1792, que reglamenta el matrimonio.

La declaración de la Constitución y de la ley a que me he referido, quedó incorporada definitivamente en la legislación civil de Francia. El Código francés no ha hecho sino mantener aquella disposición.

¿Qué pasó cuando la revolución inició el gran movimiento, del cual esta ley, no es sino una manifestación, es decir, la secularización de la legislación? ¿Quedó encerrada su acción dentro de los límites territoriales de Francia, o por el contrario, siguió una marcha progresiva extendiéndose por el mundo con las conquistas de la República y del Imperio y más tarde con las de la civilización?

Fué lo último lo que sucedió.

Holanda, Bélgica, las provincias alemanas del Rin, adoptaron la legislación francesa, y, con ella, el principio del matrimonio civil con su reglamentación lógica.

Italia reconstituida, dictó en 1865, su Código de Florencia y estableció también allí el matrimonio civil.

Conviene leer dos de sus artículos, porque pudiera decirse que el matrimonio civil que existe hoy en el mundo, es diverso del que nosotros queremos establecer; y es mi propósito demostrar que, todos nuestros esfuerzos, tienden a que nos coloquemos en las mismas condiciones en que se encuentran los pueblos más civilizados y más morales de la tierra.

El Código Civil italiano establece en el artículo 93 lo siguiente: «El matrimonio debe celebrarse en la casa comunal, públicamente, ante el oficial del estado civil de la comuna, donde uno de los dos esposos tengan su domicilio o su residencia.»

Y el artículo 117 está redactado en estos términos: «Nadie puede reclamar el título de esposo y los efectos civiles del matrimonio, si no presenta el acta de celebración extraída de los registros del estado civil, salvo los casos previstos por el artículo 364.» Los mismos casos que prevemos nosotros y a que se ha referido el señor senador por Corrientes: cuando el registro se extravía, el oficial no ha hecho la inscripción en el registro, o algo semejante.

Tenemos, entonces, que en Europa, ya están incorporadas a la legislación francesa que establece el matrimonio civil, Bélgica, Holanda, las provincias alemanas del Rin e Italia; otro tanto sucedió con las otras provincias de los Países Bajos.

Para estudiar esta cuestión en la historia moderna o en su situación actual, es necesario tener en cuenta, la índole institucional de cada país; y la Cámara me perdonará si, en el deseo de justificar mis opiniones, detengo su atención con una ligera reseña de la diversa legislación que gobierna el matrimonio en las partes del mundo que son dignas de tenerse en cuenta en un Parlamento, para legislar sobre asunto análogo.

Inglaterra, por ejemplo, todos los señores senadores lo saben, está gobernada por leyes peculiarísimas.

En ninguna otra nación se encontrará el conjunto de disposiciones que resulta de los sedimentos que los tiempos y diversos factores sociales, han dejado en la legislación del

pueblo inglés: razas, escuelas políticas, religiones, sectas, se han alternado en su gobierno y han dejado la huella de su paso.

Así, por ejemplo, tenemos que en Inglaterra, hasta 1753, el matrimonio estaba regido por el *common law*, es decir, por el derecho consuetudinario.

En 1753, bajo el reinado de Jorge II, lord Hardwicke, canceller de la Corona, inició la reforma de la legislación, para responder a las necesidades de la época. El *common law* era en Inglaterra, casarse como cada uno quería. El simple consentimiento, bastaba para constituir el matrimonio, y esto lo voy a comprobar, dentro de un momento, con autoridad indiscutible.

Lord Hardwicke, en su reforma de 1753, reglamentó el matrimonio únicamente para dentro de la Iglesia anglicana.

Era la Iglesia establecida, y hacía lo que hacen las iglesias establecidas, es decir, oprimir, despotizar a los que no pertenecen a su comunión.

La legislación de aquella época adolece de numerosos defectos, pero, sobre todos, del muy grave, de no reglamentar el matrimonio sino para los que pertenecen a la Iglesia anglicana.

Esta situación duró hasta 1836, en que John Russell reformó la legislación, o más bien dicho, mantuvo para la Iglesia anglicana, la legislación de lord Hardwicke, y estableció una especie de registro civil para las comuniones disidentes: un oficial público que podía recibir, en su oficina, la declaración de las partes que querían contraer matrimonio, y aun nombrar un delegado para que fuera testigo en alguna de las iglesias autorizadas, de la celebración de aquel acto.

Tal era, en 1836, la legislación inglesa, y tal es hoy día. Pero esta es la situación de Inglaterra propiamente dicha, la parte del reino unido que se conoce con ese nombre.

Era y es muy diversa la situación de Escocia y de Irlanda.

En Escocia es tal la legislación que gobierna el matrimonio, que se ha podido decir, con razón, que un escocés no sabe muchas veces si está casado o soltero.

Desde luego, en Escocia, existía el derecho consuetudinario de casarse por el simple consentimiento. Algunos se casaban ante los ministros de su religión, sacerdotes o pastores; pero la ley autorizaba y declaraba válido el matrimonio celebrado sin fórmula alguna, siempre que no se pusiera en cuestión, el hecho fundamental del consentimiento de las partes.

Yo no sé si los señores senadores han oído hablar de un casamiento usado en Inglaterra, que ha conservado el nombre de un lugar de Escocia: el casamiento de Gretnagreen.

Llamábase así porque este sitio se encuentra próximo a la frontera, y las personas que no querían sujetarse a la ley de Jorge II, de 1753, se trasladaban allí y se casaban en la forma fácil que la legislación escocesa permitía.

En algún tiempo, se recomendó como lugar de buen tono para celebrar estos matrimonios, la casa de un herrero, que era la más próxima a la línea fronteriza, y en donde se guardaba un registro de matrimonios; y lord Brougham cuenta que, llegó un momento, en Inglaterra, en que el presidente del consejo, el canciller de la Monarquía y el lord guardasellos de Inglaterra, eran casados en Gretnagreen: tal fué la boga que ese género de matrimonios alcanzó entre la más alta sociedad inglesa, que aprovechaba franquicias de la legislación escocesa, para no sujetarse a las formas que imponía la ley de 1753, que, por cierto, no tenía nada de exigente.

A propósito de esto diré que, principalmente, se reputaba como un inconveniente en las costumbres inglesas, la publicación del matrimonio. Horacio Walpole dice en alguna parte: «¿Qué diría Milady Ailesbury, si se le dijera que tenía que anunciarse públicamente en la Iglesia parroquial, durante tres domingos? Guardaría sus vestidos de viuda por toda la vida, antes que someterse a una ceremonia tan impudente.» Tal suele ser el concepto del pueblo, en un momento dado, respecto de las leyes que lo gobiernan. Son preocupaciones que como se comprende perfectamente, no resisten a la razón, y que el tiempo se encarga de destruir.

Pero vuelvo a mi tema.

El Escocia, el matrimonio está regido todavía por el *common law*, por el derecho consuetudinario. Hay allí propiamente, dos clases de matrimonio: el matrimonio regular, que es el que se celebra ante el ministro de la religión, y el matrimonio irregular, pero que por llamarse tal, no es ante la ley menos válido. Irregular se llama en concepto social.

El matrimonio irregular, puede celebrarse sin forma alguna civil ni religiosa: basta el consentimiento de las partes para que el matrimonio produzca sus efectos. Las mayores de 12 ó 14 años, se casan así sin consentimiento de sus padres, y casados quedan. Los ingleses aprovechaban de esta liberalidad hasta 1852, en cuya fecha — tengo aquí una pequeña esta-

dística — se celebraban, más o menos, mil y tantos matrimonios irregulares por año.

En 1856, lord Brougham reformó la legislación, estableciendo que no podían casarse, con arreglo al derecho consuetudinario de Escocia, sino aquellos que tuvieran, por lo menos, veintidós días de residencia; llenada esa condición, podían ampararse de la ley y costumbres escocesas. Esta situación legal subsiste hasta el presente.

En Escocia se celebra el matrimonio por palabras de presente.

Se cita el caso de que un hombre, próximo a suicidarse, declaró delante de sus servidores que era su voluntad casarse con una mujer que se encontraba en su casa; los tribunales declaran válido este matrimonio.

También lo es por palabra de futuro, cuando la palabra va seguida de la vida maridable.

Y en otra forma: *habitant reputé*; por costumbre y reputación. Dos personas viven unidas sin haber hablado nunca de casamiento, pero con las costumbres de casados y con la reputación de tales; casados están por la ley; cuando el caso llega, el juez pronuncia la validez del matrimonio.

Esto da lugar a lo que antes indicaba sobre la inseguridad del matrimonio en Escocia.

En Irlanda hay siete formas de casarse conocidas. Desde luego el *common law*, es decir, el consentimiento; después el casamiento de los católicos, ante sus párrocos; el casamiento de los protestantes, bajo la ley de 1753, y otras que no recuerdo.

Respecto de los católicos, tengo que hacer notar cuál fué la situación que les creó la ley de 1753. El antecedente es de mucha importancia, porque va a tener aplicación a las reformas que introducimos al proyecto del ministerio. La ley de 1753, establecía que el matrimonio contraído por un miembro de la Iglesia anglicana, tenía que ser bendecido por un sacerdote de esa Iglesia.

En 1829 se produjo un caso en Escocia, que tuvo la más alta repercusión. Una niña distinguida, de una familia presbiteriana, Ester Graham, se caso con un anglicano, Jorge Millis, ante un sacerdote presbiteriano. Millis vivió dos años con su esposa. A los dos años se fatigó de ella y se casó con otra. La parte agraviada dedujo acción de bigamia. Los tribunales de Irlanda, donde creo se produjo, declararon que el primer matrimonio era nulo, porque el ministro que los había casado era presbiteriano, y, no habiendo sido revalidado el matrimonio ante el ministro anglicano, era nulo, con arre-

glo a la ley de 1753. Se llevó la cuestión al Parlamento, y la Cámara de los Lores, después de oír la opinión del presidente de la Corte de Pleitos Comunes, confirmó la resolución de los tribunales irlandeses.

Y la pobre niña, engañada por un malvado, y burlada por las prescripciones de una ley inicua, no encontró medio de salir de aquella situación anómala. Había vivido casada, dos años, se había vinculado según sus creencias y según lo que ella creía la ley de su país, y se encontraba deshonrada, sin marido, sin reparación ante los tribunales y sin derecho ante la ley. La ley inglesa mantiene, en la misma situación hasta el día de hoy, a todos los católicos irlandeses. Cuando un católico se casa con una anglicana o viceversa, debe hacerse revalidar la unión ante el ministro anglicano; porque de lo contrario el matrimonio es nulo.

Iniquidad semejante tenía que levantar las conciencias, y en Inglaterra se ha promovido una reforma legislativa sobre este delicado asunto, con el objeto principal, de unificar la legislación, de dar bases ciertas al matrimonio, de no dar lugar a que se produzcan estas situaciones anormales e inhumanas, como resultado natural y necesario de las deficiencias de la legislación.

En 1866 se inició la reforma en el parlamento. La comisión encargada de proponer la reforma, aconsejó sus bases fundamentales, y entre ellas, figura la creación del Registro Civil, para la celebración del matrimonio, de todos aquellos que quieran prescindir de las formalidades eclesiásticas.

En Prusia, la Constitución establecía, en el artículo 19, que se dictaría una ley de matrimonio civil, y en 1859 esa ley se inició. La Cámara de los Senadores la rechazó. En 1859 la Cámara de Diputados votó la necesidad del matrimonio civil obligatorio. En 1873 se proyectó la ley y en 1874 se sancionó. El artículo 24 establece el matrimonio civil y prohíbe al sacerdote o ministro de la iglesia, celebrar matrimonio alguno, sin que se le justifique previamente que se ha celebrado el acto civil. La infracción de esta disposición, está prevista y castigada en el artículo 349 del Código Penal.

En Suiza, la Constitución de 1874 declaró que era materia de competencia del gobierno federal, dictar la ley de matrimonio civil. En 1875 se dictó esa ley. El artículo 20 establece la supresión de todos los impedimentos de carácter religioso; el artículo 40, la obligación de celebrar el matrimonio civil antes de celebrarse la ceremonia religiosa y la de justificar-

lo ante el ministro o párroco, y el 59, la responsabilidad del sacerdote o ministro de una religión, que celebre un matrimonio sin aquella justificación previa.

En Rusia se ha dictado, también, en 1874 una ley de matrimonio civil. El zar de Rusia, papa de la Iglesia oriental, no se ha creído autorizado para negar esta forma de matrimonio a los que no son miembros de su comunión religiosa.

En el imperio alemán, la Constitución de 1848 decía: «La validez del matrimonio, en cuanto a sus efectos civiles, no dependerá sino del acto civil; la bendición nupcial no puede tener lugar sino después del acto civil.» Esta Constitución tuvo, como se sabe, vida efímera. En 1867 y 68 la Dieta de la Alemania del Norte invitó al canciller de Alemania, a proponer una ley de matrimonio civil.

En 1869, el congreso de juriscultores de Heidelberg, votó una proposición, declarando que la ley de matrimonio civil era necesaria para Alemania.

En 1873, se presentó en el Reichstag el proyecto de matrimonio civil y de registro. El Reichstag sancionó la ley en 1874 con algunas excepciones que no afectaban el fondo del asunto. Disponía, por ejemplo, que conservarían la legislación actual, las provincias alemanas del Rin, que tenían ya el matrimonio civil.

Esta ley no fué aprobada por el consejo federal de Alemania y quedó sin efecto; pero, el año siguiente, 1875, el consejo federal presentó un proyecto que fué sancionado y cuyo artículo 41 dispone que el matrimonio civil sea obligatorio. El artículo 67 establece la penalidad a los ministros o sacerdotes de cualquier iglesia que celebren un matrimonio religioso sin que antes se haya celebrado el civil, penalidad que puede llegar a 300 marcos de multa o a tres meses de prisión.

Hay que advertir que el derecho canónico protestante alemán hace depender la validez del vínculo del matrimonio, de la bendición nupcial, y no obstante, el gobierno alemán ha aceptado la misma regla que han adoptado las demás naciones a que me he referido.

Pero hay una nación que sin, tener ni mucho menos la misma autoridad que las que he podido recordar respecto de una buena o liberal legislación, tiene sin embargo gran peso en la discusión de esta ley, precisamente por su condición de pueblo católico. Me refiero a Austria. El Imperio austríaco es una nación en la cual la idea católica ha tenido siempre verdadera preponderancia, y, sin embargo allí el principio

dominante es el contrato civil que, aunque consagrado por la religión, está sujeto a la ley y a los tribunales civiles.

En 1783 el emperador José II, inició la reforma. El no quería modificar las condiciones en que el matrimonio se celebraba en sus Estados; pero, sí, quería reivindicar como propio, el derecho de fijarlas como acto de la soberanía nacional, y, al efecto, dictó una ordenanza, prescribiendo la forma del matrimonio y declarando explícitamente, que esta institución estaba gobernada por la ley civil.

En 1811 se sancionó el Código Civil, que mantuvo los principios fundamentales de la ordenanza de 1783.

Este código tiene peculiaridades dignas de notarse.

En el Imperio Austro Húngaro se funden muchas y diversas nacionalidades, y esta ley de aplicación común, ha tenido que seguir los accidentes de la composición de la masa nacional; hay preceptos en ese código, para los matrimonios entre protestantes, preceptos para los católicos y preceptos que rigen los matrimonios de los judíos. Así, por ejemplo, el parentesco colateral, que es impedimento hasta el cuarto grado entre los católicos, no es impedimento entre los judíos sino hasta el tercero.

El Código Civil declara que, cuando se trata de judíos, éstos pueden casarse, después del tercer grado, sin impedimento alguno.

El divorcio, que puede discutirse si se ha de admitir o no, ya se trate del ejercicio del derecho por parte del hombre o por parte de la mujer, y que así se ha discutido, planteado o resuelto en todos los pueblos cristianos, reviste para la legislación hebráica, formas especiales. Con arreglo a las leyes hebráicas, el judío puede repudiar a la mujer por causa de adulterio, pero la mujer no puede pedir divorcio, por causa de adulterio del marido.

El código austriaco ha consignado este precepto en su legislación. En una palabra, ha procurado resolver todas las cuestiones que nacen de la diversidad de condiciones y de creencias de los diferentes elementos componentes de su nacionalidad; dándoles a cada una, una legislación propia y especial.

El resultado se comprende perfectamente cuál es: una gran confusión. Pero, en el fondo, el Código Civil declara y establece que el matrimonio civil es esencial para la validez del acto, y que la reglamentación de este matrimonio y la jurisdicción a que queda sujeto, después de celebrado, es esencialmente civil.

En 1885 se celebró un concordato entre la

corte de Roma y la monarquía austriaca, en cuya virtud se restablecieron las leyes canónicas y los tribunales eclesiásticos; pero esta situación fué de poca duración. En 1868 el concordato fué denunciado y se restableció el imperio del código y de los tribunales civiles para las causas de matrimonio. En 1870 se sancionó el matrimonio civil para los que no profesan culto alguno.

Además, actualmente en Austria existe el divorcio.

De manera que no hay duda alguna sobre las ideas que allí imperan.

En 1876, la Cámara de Diputados sancionó una reforma del Código Civil sobre impedimentos matrimoniales.

La Cámara de los Señores rechazó el proyecto, expresando, por una moción de postergación, motivada, que esperaban que el gobierno iniciara una ley general de matrimonio.

A este resultado concurrieron con su voto los liberales y hasta algunos obispos católicos, que hicieron la salvedad de que prestaban su voto a la moción porque consideraban que el gobierno no presentaría una ley que fuera hostil a sus creencias y sentimientos religiosos; pero el rechazo o postergación del proyecto fué motivado, porque la reforma se limitaba a suprimir el impedimento del orden, y los liberales buscaban la revisión general de la ley, para establecer el matrimonio civil como regla única y obligatoria.

Quizá he dado una extensión indebida a esta reforma que se refiere exclusivamente a la eliminación de los impedimentos de carácter religioso.

El derecho de las naciones, para discutir y sancionar estas leyes, no ha sido siquiera puesto en duda. También España, señor presidente, la católica España, ha vivido bajo el imperio del matrimonio civil. En 1870 se dictó la ley, cuyo artículo 2º dice: que el matrimonio civil es el único válido para la ley española; y cuyo artículo 24 dispone que el matrimonio religioso podrá celebrarse antes, durante y después de celebrado el matrimonio civil.

Más tarde me he de ocupar de los efectos que ha producido esta disposición. Por lo pronto, quiero hacer constar que en 1875 fué necesario declarar válidos todos los matrimonios religiosos que se habían celebrado sin intervención de la autoridad civil, y, según informaciones autorizadas, en este mismo momento tramita o se ha concluido un arreglo con la Santa Sede para restablecer el matrimonio civil, con modalidades que sean aceptables para la Iglesia.

Debe tenerse en cuenta, para apreciarla en este país, las condiciones políticas excepcionales en que se encuentra. España es, no solamente un país católico, sino una nación en la cual existe un partido poderoso vinculado a la Iglesia: el Partido Carlista, al cual no conviene fortalecer, dándole asidero para que mueva las pasiones religiosas, con propósitos e intereses dinásticos.

En Estados Unidos, el matrimonio ha sido definido por Pommeroy, que adopta la opinión de Bishop: «El matrimonio es un estado civil existente entre un hombre y una mujer, legalmente unidos por toda la vida, para aquellos propósitos sociales que están basados en la diferencia de sexo.»

La base esencial de este matrimonio es el consentimiento. Se requiere licencia del secretario del condado, o de algún otro funcionario del condado, en los siguientes Estados: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Mississippi, Carolina del Norte, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y West Virginia.

En la mayor parte de estos Estados hay penalidad para los que celebran matrimonio religioso o en cualquier forma, sin el permiso previo de la autoridad civil que la ley establece; pero, como la regla, en todos los Estados, es que el consentimiento es bastante para el matrimonio, y el consentimiento subsiste, aun cuando las formas se hayan violado, el matrimonio no se invalida por falta de licencia o inscripción.

El comentador Kent, en su obra fundamental, establece lo siguiente:

«El derecho consuetudinario (*common law*) no exige ceremonias especiales para la válida celebración del matrimonio. El consentimiento de las partes es todo lo que se quiere»...

«No se reconoce autoridad alguna eclesiástica en la formación del vínculo, y es considerado enteramente como un contrato civil. Esta es la doctrina del derecho consuetudinario, y también de la ley canónica que gobernó los matrimonios en Inglaterra, hasta la ley de matrimonio de Jorge II (1753, lord Hardwicke).»

En Méjico, el artículo 22 de la Constitución del 74, declara que el matrimonio es un contrato civil, sujeto a la ley y tribunales civiles.

En Chile, regía la legislación española, exclusivamente, hasta la pragmática de 1820, en que se establecieron ciertas formalidades para el casamiento de los menores y una severa

penalidad para los párrocos que celebraban matrimonio con prescindencia de aquellas formalidades. En 1844 se dictó una ley de matrimonio civil para los disidentes, que se dice redactada por el señor Andrés Bello. El Código Civil mantuvo la ley del 44, para disidentes: por lo demás, el matrimonio era gobernado por las leyes canónicas.

En 1854 se dictó la ley actualmente en vigencia, cuyo artículo 1º dice así: «El matrimonio que se celebre con arreglo a las disposiciones de esta ley no produce efectos civiles. Es libre para los contrayentes sujetarse o no a los requisitos y formalidades que prescriba la religión a que pertenecieron. Pero no se tomarán en cuenta esos requisitos ni formalidades para decidir sobre la validez del matrimonio, ni para reglar sus efectos civiles.» El artículo 2º declara que: «El conocimiento y decisión de todas las cuestiones a que diera margen la observancia de la ley corresponderá a la jurisdicción civil.»

La República Oriental, todos los señores senadores lo saben, ha adoptado más o menos una ley de matrimonio civil análoga.

Entiendo que la República de Colombia ha hecho otro tanto; y en Brasil está iniciada la reforma en el mismo sentido.

Esta fastidiosa, aunque ligera, excursión al través de la legislación del mundo, demuestra que, en el momento actual, la ley que gobierna el matrimonio, en la gran mayoría de las naciones civilizadas, es la ley civil; y, sobre todo, que en ninguna parte se discute, es el derecho del soberano para reglamentar un acto de la vida social.

Después de haber justificado que a la civilización cristiana no repugna la prescindencia del sacramento en el acto matrimonial, me parece que puedo decir, que la civilización humana no está en pugna con el matrimonio civil que nosotros proyectamos.

Pero se ha preguntado, ¿por qué la República Argentina no goza aun del matrimonio civil? ¿Es que no ha podido dictar la ley, o no ha querido dictarla?

La discusión de la facultad soberana de dictar esa, como cualquiera otra ley, me parece perfectamente inútil. Hay un artículo en la Constitución que resuelve cualquier duda al respecto. Esta Constitución dice: «Los tratados que en su consecuencia se celebren y las leyes que el Congreso dicte son la ley suprema de la Nación.»

Cuando la Constitución del país ha hecho tal declaración, los representantes del pueblo ar-

gentino no pueden poner en duda su alcance. Pero, aun prescindiendo de lo términos expresos de este artículo constitucional y son discutir su inteligencia, porque pudiera entenderse que su letra está subordinada a los principios sobre que se dice formada, yo pregunto: ¿cuáles son los antecedentes respecto al ejercicio de esta misma facultad?

El señor senador por Corrientes, en su clarísima y completa exposición, ha recordado que, en todo tiempo, se han ejercitado poderes civiles para establecer las reglas o leyes canónicas en todos y en cada uno de los pueblos en que estas reglas o leyes han imperado; y sin salir de nuestro propio caso, yo recuerdo a los señores senadores, cosa que sin duda saben que, si las declaraciones del Concilio de Trento conservan imperio hasta este momento en nuestra legislación, es en virtud de una cédula de Felipe II, que en 1564 las mandaba guardar con cautelosa salvedad: en cuanto no alterasen ni implicasen modificación de sus derechos reales.

Por consecuencia, señor presidente, no es ni siquiera cuestionable la facultad de que estamos investidos para legislar sobre esta materia.

El fundamento de nuestro derecho no puede ser discutido.

Antes del cristianismo, la sociedad y el gobierno civil existían. ¿Tenían o no tenían derecho los gobiernos anteriores al cristianismo y al Concilio de Trento para fijar las reglas del matrimonio? Y si lo tenían, ¿cómo ni por qué lo perdieron? ¿Cómo la soberanía nacional, la soberanía política puede ser modificada o amonada por la aparición o introducción del cristianismo en las costumbres del mundo civilizado? No se encontrará ni en los antecedentes legítimos de la Iglesia, ni en su buena doctrina, nada que pueda justificar una invasión o revolución semejante en la legislación civil y política del mundo.

Nuestro gobierno no ha usado antes de esta facultad, por razones que se han debido dar francamente por los liberales: para cerrar el paso a las que su silencio habrá motivado.

¿Por qué no reconoceríamos lo que es una hecho averiguado e histórico, que la tradición argentina estaba vinculada al matrimonio católico? ¿Por qué no reconoceríamos que la tradición es una fuerza social y una fuerza de gobierno? ¿Y, por qué no explicar son ese antecedente el que, ni Rivadavia con su poderosísima iniciativa, ni Mitre con su espíritu liberal, ni Sarmiento con su gran potencia de reformador, hubieran iniciado la modificación de esta ley, porque el espíritu público no estaba preparado todavía para la reforma? Pero, pre-

cisamente, es el carácter de los actos del gobierno, cuando el gobierno se encuentra en manos de estadistas que saben cuál es su misión, tomar en cuenta la opinión pública y el estado social.

Para justificar esta opinión que, por otra parte, se justifica por sí misma, bastaría recordar que el matrimonio civil fué sancionado en Santa Fe, hace veinte años y la ley provocó una revolución que derrocó al gobernador. El espíritu público, la Nación, no estaban preparados para el matrimonio civil.

Agrego más: el país no lo necesitaba todavía.

El matrimonio civil es institución correlativa de una población más heterogénea y de una civilización más compleja que la de la República Argentina en aquella época.

La masa de nuestra población era católica, no encontraba inconveniente alguno en que el acto se celebrara ante sus párrocos respectivos, y mal que mal, en los tiempos que atravesábamos, los ministros del culto católico eran tan buenos guardianes de los archivos públicos como cualquier juez de paz o alcalde de territorio provincial.

De ahí, pues, que la necesidad de la reforma no fuera sentida. Los miembros de otras religiones eran escasísimos, éstos residían principalmente en Buenos Aires, y en Buenos Aires tenían el matrimonio mixto, con el cual se satisfacían las necesidades del momento.

Pero, ¿es aquella la situación actual?

Es una observación de carácter general que, en todo organismo a medida que se presenta y siente una necesidad, se prepara y manifiesta el órgano que ha de servirla; y es tan difícil contrariar esta ley de organización social, como contrariarla en el orden de la naturaleza. Los cuerpos orgánicos y el cuerpo social, están sujetos a la misma ley. Y bien, la condición social de nuestro país se ha modificado profundamente. Hoy existen sujetos a nuestra legislación, hombres de todas las religiones, que vienen de todos los extremos del globo, que hablan todas las lenguas, que tienen todas las creencias o que no tienen creencia alguna, y llega la oportunidad de averiguar si podemos o no reformarla, para atender a estas nuevas exigencias del organismo social.

Esto se relaciona con la discusión sobre oportunidad de la reforma. Pero, la oportunidad de la reforma, ¿cómo no reconocerla? ¿Cómo no reconocer que la tradición se ha debilitado, que el espíritu público y la opinión pública se han modificado y transformado, cuando tenemos como hecho visible y patente ante los ojos;

que esta ley que produjo una revolución en Santa Fe, y que motivó el derrocamiento de su gobernador en 24 horas, es recibida con aplauso o con perfecta tranquilidad en toda la República, y cuenta de antemano con la opinión de la mayoría de los miembros del Congreso?

No tengo para qué mezclar a esta cuestión los asuntos de carácter político, ni para qué discutir si la representación del país es la que pudiera desearse; pero digo: si las creencias católicas se manifiestan entre los amigos del gobierno, en la forma vigorosa, espontánea y propia con que se ha manifestado por los labios del señor senador por Córdoba, y si análogos sentimientos existieran en los demás miembros de este Parlamento, análogas manifestaciones escucharíamos, y cualquiera que fuese la opinión del Poder Ejecutivo, el Congreso no votaría la ley, porque el imperio de las ideas religiosas es de tal naturaleza que prevalece sobre toda razón de orden político.

¡La oportunidad! Pero, ¿quién puede dudar, señor presidente, que la resistencia tradicional a la reforma se ha modificado por la experiencia propia y diaria, hasta producir el convencimiento de que ha llegado la oportunidad de cambiar la base jurídica de esta institución?

En primer lugar, no puede ocultarse que nuestra legislación es fundamentalmente defectuosa, tan defectuosa, como quizás no se lo ha imaginado hasta este momento el honorable Senado.

Voy a mostrarle algunos de sus vicios que bastarían en cualquier momento, para mover la conciencia de liberales y católicos y provocar la reforma, si no por parte de los católicos, en el sentido en que nosotros lo pretendemos, a lo menos en una forma tal que no diera lugar a las inícuas consecuencias que pueden engendrar.

Desde luego, no pueden casarse hoy día en la República, los que no tengan culto externo y los que no tienen sacerdote de su credo. Esta es una deficiencia que no aparecería en épocas anteriores, pero hoy se ha manifestado ante los poderes públicos de la Nación por las peticiones que se han formulado.

Los que no son católicos, siendo cristianos, no pueden casarse sin dispensa, y dispensa quiere decir erogación de dinero. Pero, digo más; es muy fácil el matrimonio de los disidentes con católicos, bajo el régimen actual, cuando el disidente es el hombre y católica la mujer; muy difícil, imposible, cuando el católico es el hombre y la mujer es la disidente. Y esto por una razón, que la Cámara comprenderá en el acto. La Iglesia católica, usando de su dere-

cho como Iglesia, exige de todo el que se casa con un miembro de otra comunidad, el juramento o el compromiso de educar a sus hijos en la religión católica. Cuando es el marido el disidente, éste cede, acepta la dirección de la madre para la educación moral del niño y le acuerda el derecho de inculcarle sus sentimientos religiosos; no hay obstáculo y el matrimonio se celebra. Pero cuando la disidente es la madre, subsiste el conflicto y el derecho cambia.

¿Acaso la madre protestante no tiene las mismas exigencias que la madre católica? Movida por los mismos afectos de ternura y por análogos sentimientos religiosos, ella también quiere que sus hijos se eduquen en la Iglesia que tiene por verdadera. Y, ¿saben los señores senadores cuáles son las consecuencias de esta situación?

Que actualmente, día por día, los matrimonios que se deberían contraer en la República Argentina, entre niñas disidentes y caballeros católicos, se celebran en Montevideo o en la Colonia. Me consta personalmente. Conozco familias distinguidas, cuyos nombres podría invocar en este momento, que han procedido así.

Hace ocho días un caballero alemán me dijo: «Acabo de llegar de la Colonia donde mi hija se ha casado: ha tenido que ir a celebrar allí el contrato matrimonial, para salvar los escrúpulos de su conciencia; su esposo es católico y ella no ha querido renunciar a lo que considera no sólo un derecho, sino su deber imperioso primordial, si llegara a ser madre.»

El artículo 230 del Código Civil establece que las causas de nulidad de matrimonio celebrado entre católicos, son extensivas a los disidentes.

A este respecto, el señor ministro de Culto, hizo valer un argumento, que no se si la Cámara habrá apreciado en su verdadera importancia.

En la Iglesia católica existen impedimentos que aunque dirimentes pueden dispensarse, por ejemplo, el parentesco espiritual. En alguna iglesia disidente puede no existir este impedimento.

¿Cómo harán los que se encuentran en ese caso, para celebrar válidamente su matrimonio?

¿Pedirán dispensa? No, porque su Iglesia no dispensa un impedimento que no conoce. ¿Lo dispensará la Iglesia católica? Tampoco, porque ésta no tiene competencia para entender en tales matrimonios.

He ahí, pues, una situación sin salida para los disidentes.



Pero es más grave todavía la disposición del artículo 181, del Código Civil, que dice: «Es nulo el matrimonio celebrado por sacerdotes disidentes, cuando uno de los esposos es católico, si no fuese inmediatamente celebrado por el párroco católico.» Es decir, el precepto de la ley inglesa de 1753; el precepto que invalidó el matrimonio de Jorge Millis y Ester Graham y que sublevó el espíritu público de Inglaterra. Millis se casó con una niña virtuosa e inocente; el matrimonio se celebró con arreglo a los ritos de la iglesia a que pertenecía la niña, quien estimó como una consideración de su marido, hacia ella el que no la llevara a santificar el matrimonio ante el ministro de su culto.

Dos años más tarde ese hombre se casa con otra mujer y su primer matrimonio resulta nulo. La niña no tiene marido, los hijos que ha concebido son ilegítimos. Esta es la misma situación creada por la legislación argentina, para las niñas disidentes que se casen con un católico y no hagan ratificar su unión ante un párroco católico.

De un día para otro el caso puede producirse.

Pero hay algo más, y aquí, toco una cuestión de gobierno. La Iglesia no tiene medios para desempeñar las funciones temporales que definiendo como propias.

¿No sabemos todos los argentinos que la Iglesia carece del número de sacerdotes argentinos que necesitaría para que los servicios de la vida civil y de la vida religiosa que están a su cuidado sean bien y noblemente desempeñados? ¿No sabemos cómo se reclutan en Europa, sacerdotes, cuyo carácter no quisiera discutir en este momento, pero que más bien parecen ejercer una profesión lucrativa que funciones sacerdotales? ¿No sabemos que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ve al frente de todos los curatos extranjeros, no por negligencia ni por culpa de los prelados, sino porque no existen los sacerdotes argentinos necesarios para tales funciones, que son en parte funciones de gobierno?

Entonces, digo: los que conocemos la situación del país y de su Iglesia, no podemos retardar la reforma por respeto a los escrúpulos, bien sean ellos legítimos de algunos o de muchos católicos, cuando de ahí pueden venir males y perturbaciones para la vida social.

Pero la incapacidad misma de los párrocos, llega a un extremo de que el Senado no tiene idea.

Hace ocho días en una de las iglesias de esta ciudad, fué un hombre a bautizar tres hijos. Era un hombre de vida liviana. Los tres hijos tenían diferentes madres y el párroco de la iglesia le exigió que declarara el nombre de las tres. Afirmo el hecho bajo mi palabra.

El nombre de las tres madres, de las cuales una o dos eran casadas, ha quedado consignado en el registro de la iglesia, contra los preceptos de la ley.

No sería, pues, a nombre de la competencia para el desempeño de las funciones públicas, que se podría trabar la acción legislativa del Congreso.

Son todos estos hechos, todos estos antecedentes los que han debilitado la tradición del país y modificado la opinión y el espíritu público.

Por eso vemos que poco a poco la transformación se opera y que los resultados no son para lamentarlos. La campaña se inició con la secularización de los cementerios; prosiguió, en seguida, con la secularización de las escuelas, vino más tarde la ley del matrimonio civil, y en este momento estamos en la secularización del matrimonio.

Las tres primeras leyes han dado los resultados que debíamos de esperar: la cuarta los ha de dar también.

Vamos a la secularización de la legislación buscando la mejor administración de los intereses sociales que son los únicos que están confiados a nuestros cuidados. El cuidado de las conciencias, no es de nuestro resorte.

Ya me he detenido demasiado quizás en esta exposición; pero todos estos antecedentes eran indispensables a la ley que presentamos y convenía dejarlos consignados para que no se atribuyera nuestro silencio a ignorancia o negligencia.

Cada uno de los hechos que he invocado, cada una de las legislaciones que he citado, son otros tantos argumentos en defensa de la institución que tratamos de establecer, y que debemos procurar prestigiar ante el país para que como todas las leyes justas y buenas de la República, sea recibida con respeto y con amor, para que sea ejecutada y cumplida fielmente y pueda dar legítimos resultados, y para que esta institución, que responde al movimiento liberal de nuestra época, no fracase por una mala inteligencia de su espíritu o de su letra.

Ahora necesito decir algunas palabras para completar en algunos puntos la exposición notabilísima de mi honorable colega el señor Se-

nador por Corrientes, respecto del proyecto que hemos presentado y manifestar en qué consiste la diferencia substancial con el del Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo, como lo dije, había presentado este proyecto, o iniciado esta idea, movido por una intención cuya bondad no puedo dejar de reconocer, pero no había sido feliz. El había creído, como significó el señor ministro de culto, satisfacer las exigencias de nuestra época, sin irritar el sentimiento religioso de una gran parte de los argentinos.

El Poder Ejecutivo persigue una quimera. El sentimiento religioso de los católicos argentinos — me refiero a los católicos ardientes — no puede ser adormecido ni mistificado. Ellos saben bien que se trata de secularizar la legislación del matrimonio: es este el carácter de la ley que discutimos, es esto lo que nos proponemos, es esto lo que debe quedar establecido.

Desde qué aspecto los católicos que se colocan en la posición que han asumido los opositores a este proyecto, podrían aceptar nuestra doctrina, no puedo sospecharlo, y el proyecto del Poder Ejecutivo adolece del defecto insanable de querer satisfacer a católicos y liberales, y de no haber satisfecho ni a liberales ni a católicos.

El señor ministro de culto e instrucción pública piensa que su proyecto es original: ¡ingenua ilusión! La idea fundamental de su proyecto consiste en que el matrimonio religioso se celebre cómo y cuando se quiera; y en que el matrimonio civil se celebre ante el funcionario público — él dice que se inscriba, pero en el fondo implica una celebración — y sólo este acto hace fe.

Si se aceptase como mera inscripción, los argumentos que ha hecho el honorable senador por Corrientes son irrefutables: no puede reducirse a la mera inscripción del acto, la intervención del poder civil, cuando se trata de contratos que interesan a la organización social.

Si no se trata de la mera inscripción, y se toma esta inscripción como una ratificación o celebración del contrato matrimonial, entonces el proyecto no tiene originalidad de ninguna especie; es el mismo, redactado en otra forma, que sancionaron en 1870 las Cortes españolas; crea exactamente la misma situación de derecho que creaba la ley italiana hasta 1874: el matrimonio civil como único acto digno de fe ante la ley; el matrimonio religioso cómo y cuando las partes quieran celebrarlo.

Pero ¿la falta de originalidad está compensada con la bondad de la institución? ¿Salva los inconvenientes del pasado y salvaguarda los intereses sociales que se quieren amparar con la ley de matrimonio civil?

Lo niego categóricamente, y lo voy a demostrar con la experimentación de instituciones semejantes, y con observaciones de aplicación nacional que me parecen incontestables.

Todos conocemos la índole y la composición de nuestro país, y precisamente para responder, en parte, a las creencias de la mayoría del país, el Poder Ejecutivo ha bastardeado la institución del matrimonio civil, aceptando como punto de partida el matrimonio religioso, aun cuando no le reconoce efectos civiles.

Y bien: ¿qué sucedería si se aceptara la reforma tal como el Poder Ejecutivo la ha proyectado? Los matrimonios se celebrarían, todos o en su mayor parte, en sus seis u ocho décimos de la población argentina, ante el párroco y en la forma religiosa. Y después, ¿se inscribirían en el Registro Civil? Esta es la cuestión.

El sentimiento religioso se encontraría satisfecho con el acto celebrado ante la Iglesia; las conveniencias de la Iglesia la inducirían a no aconsejar su revalidación ante la autoridad civil, y la consecuencia necesaria y fatal sería que dentro de diez o veinte años tendríamos dos generaciones nacidas en el concubinato, en el concubinato ante la ley, por más que ante la religión hubiera una ceremonia sagrada y un vínculo santo.

La sociedad argentina no puede constituirse sobre esa base. Los que queremos el matrimonio civil, como los que quieren el matrimonio religioso, tenemos que aspirar necesariamente, como argentinos, a que la familia argentina se constituya sobre una base legítima e indiscutible. Es necesario no facilitar, es necesario no crear la posibilidad de que se constituya fuera de la ley.

La suposición de lo que sucedería en la República no es un capricho de mi espíritu, no es un hecho que esté fuera de las enseñanzas históricas que nos deben iluminar cuando tratemos de dictar leyes de tanta importancia.

El código italiano, como lo he dicho, estableció el matrimonio civil; era el único que declaraba válido; pero no estableció prohibición alguna a la Iglesia de celebrar el matrimonio religioso antes del matrimonio civil, ni penalidad por infracción de la ley.

En 1873 el cónsul general de Francia informaba a su gobierno que en la ciudad de Nápoles se celebraban la mayor parte de los ma-

trimonios en la iglesia, sin revalidarse ante la autoridad civil, de donde resultaba la irregularidad de todos los matrimonios, el carácter de ilegítimo de los hijos y la posibilidad — llamo sobre esto la atención de los señores senadores — y la posibilidad de que el cónyuge que se había casado en una forma que no era válida ante la ley, se volviera a casar al día siguiente, abandonando a su mujer.

Este hecho se producía con tanta frecuencia en Nápoles, que el cardenal Sforza, representante de la Iglesia, prohibió al clero que estaba bajo su jurisdicción que celebrara matrimonio alguno, si no probaba antes que se había cumplido con la ley civil.

La conciencia cristiana de aquel prelado, tal vez su patriotismo, lo indujo a no constituir la familia de sus conciudadanos fuera de la ley.

Italia ha tenido que soportar las consecuencias de ese error de legislación.

Me referí antes a la prescripción de la ley española de 1870. Se prescribió el matrimonio civil; se declaraba que era el único válido y se autorizaba al contrayente a celebrar el religioso antes, durante o después del civil.

Y el pueblo español, católico, bajo la influencia de su clero, celebró el matrimonio religioso y no el civil.

Hubo una reacción en las esferas del gobierno al cabo de seis o siete años, y se dictó una ley retrospectiva declarando válidos todos los matrimonios celebrados con violación de la ley.

En 1830 se discutió en los Países Bajos este mismo asunto.

Se trataba de establecer el matrimonio civil obligatorio antes del matrimonio religioso. Se empenó el debate entre católicos y liberales, y un diputado liberal, el señor Claurs, narró este hecho inicuo que ocurría en esos momentos. Una mujer se casa en segundas nupcias y una hija de su primer marido entabla acción respecto de bienes reservables del primer marido y, con escándalo del país entero, la madre hizo valer contra la hija la circunstancia de que el matrimonio que la había unido a su padre no era más que un matrimonio religioso y que, por lo tanto, no tenía valor ante la ley.

La conmoción operada en la conciencia de hombres morales, por este hecho, fué de tal naturaleza, que la discusión del proyecto se suspendió, y, cuando se reabrió, los opositores católicos a la ley retiraron su oposición y sancionaron la disposición clara, terminante, que manda celebrar primero el matrimonio civil, de modo que en caso alguno el matrimonio

pueda dar lugar a dudas, y dejar en situación irreparable a la mujer, que es siempre la víctima de estos errores de la legislación.

Se dirá, señor presidente, que hay un caso no previsto por la legislación francesa, ni por la legislación alemana, ni por la legislación chilena, ni por la legislación prusiana, y que, sin embargo, se ha producido, caso que hiere el sentimiento de justicia humana y que mueve la conciencia. Una niña, que tiene sentimientos religiosos, se casa bajo el amparo de la ley civil, confiada o bajo la promesa de que su marido celebrará en seguida el acto religioso. Y el marido, indigno de la confianza que en él se deposita, una vez que ha adquirido la autoridad que la ley le acuerda sobre su mujer, se niega a cumplir el acto sacramental. ¿En qué condiciones queda la mujer?

Un caso de esta naturaleza se produjo en Francia. Y, como se trataba de un derecho y de una libertad, los libres, pensadores de la escuela positivista, le buscaron solución, hicieron suya la cuestión y la estudiaron bajo todas sus formas. Unos pensaron que el matrimonio debía declararse nulo por causa de error, sobre la persona; se la había creído una persona moral y resultaba un malvado. Otros decían: no hay consentimiento, no hay contrato; porque el consentimiento ha sido *sub conditione* y debe deducirse que el matrimonio no se ha celebrado. Otros decían, — y era la opinión de Demolombe — debe considerarse la negativa del marido como causa de divorcio; hay sevicia, mal tratamiento, y está justificada la separación de cuerpos. Parece que esta opinión prevaleció.

Nosotros nos hemos dado cuenta de la dificultad y hemos procurado salvarla. ¿Cómo? ¿Sometiendo a una condición la validez del acto que instituímos y cuya ceremonia queremos rodear de todas las solemnidades que la ley prevé? No; eso no sería posible. Es principio de todas las legislaciones, que el matrimonio no ha de someterse ni subordinarse a tiempo o condición alguna. Sería fuente de los más grandes trastornos sociales.

Hemos encontrado en alguna parte una sujeción que nos ha dado la solución en esta forma.

«El oficial público no podrá oponerse a que en el acto en que celebre el matrimonio, en representación de la ley, prestado el consentimiento de las partes, el sacerdote de la comunión, o el ministro de la comunión de los casados, santifique su unión con su bendición en el mismo acto.»

De esta manera, el hecho excepcional producido en Francia, en las condiciones que antes he indicado, no podrá repetirse bajo el amparo de esta ley.

El matrimonio celebrado ante la autoridad civil, pero con carácter indisoluble, indisoluble desde el primer momento, es el rasgo fundamental de la ley, — santificada, si así lo desean los cónyuges, por el sacerdote o ministro de su culto.

La solución, creo que está encontrada. Los beneficios de la ley son indiscutibles: me parece que debemos confiar tranquilos en que, sancionándola, habremos hecho un bien al país.

He dicho.

**Sr. Presidente.** — Queda cerrada la conferencia. Se levanta la sesión.

—Eran las 7 p. m.